



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1321

2 de Marzo de 2018

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

BOLETÍN 11598-03

VOLUMEN II

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1321

2 DE MARZO DE 2018

ÍNDICE

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

BOLETÍN 11598-03

VOLUMEN I

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	12
COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO	15
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	24

VOLUMEN I

CONTINUACIÓN TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	32
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	72

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11598-03

REFERENCIA	Modifica diversos cuerpos legales para modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIO	De Hacienda, De Economía, Fomento y Turismo y De Justicia y Derechos Humanos
INGRESO	25 de enero, 2018
ARTICULADO	<p>30 artículos permanentes y 10 transitorios; los artículos permanentes modifican los siguientes cuerpos legales: ley sobre documentos electrónicos; Código de Procedimiento Civil; ley sobre letra de cambio y pagaré y Código de Comercio; bases de procedimientos administrativos; unidad de análisis financiero; ley sobre casinos de juego; Ordenanza de Aduanas; Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio; Instituciones nacionales patrimoniales, dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; sistemas de microscopía y micrograbación de documentos; simplificación del régimen de constitución de sociedades comerciales; ley sobre rentas municipales; Ley general de urbanismo y construcciones; Ley orgánica constitucional de municipalidades; Ley orgánica constitucional del Congreso Nacional; contratos administrativos de suministro; DFL que organiza las secretarías de Estado (Ley de Ministerios); Ley sobre impuesto a la renta; Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado; Ley marco para la inversión extranjera; ley sobre tratamiento tributario de instrumentos derivados; ley sobre compensación y liquidación de instrumentos financieros; constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores; bolsas de productos agropecuarios, y ley de fomento de la industria de capital de riesgo; además, se faculta a la CORFO, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para participar en la formación, constitución o administración de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, y se crea la Plataforma de Trámites Electrónicos, para los órganos de la Administración del Estado</p>

Artículo 4.- Créase la Plataforma de Trámites Electrónicos, por medio de la cual los órganos de la Administración del Estado a que se refiere el título segundo de la ley N° 18.575²⁶ podrán relacionarse directamente con personas naturales o jurídicas, a través de medios electrónicos, entendiéndose por tales aquellos que tienen capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas de los servicios que se adscriban a la plataforma o en el domicilio de las personas naturales o jurídicas que efectúen algún trámite en ella. Cuando se requiera en estas actuaciones la firma del interesado, ésta se otorgará conforme la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

En la plataforma señalada en el inciso anterior, se podrán integrar registros, sistema de información o plataformas de servicios de distintos organismos públicos o privados de interés público, de conformidad al reglamento.

El Ministerio de Economía Fomento y Turismo estará encargado de la administración y mantención de esta plataforma, la cual podrá adicionalmente contener información, servicios y trámites que ofrezcan los órganos públicos referidos en el inciso primero del presente artículo para que las personas naturales o jurídicas señaladas en el inciso primero puedan realizar sus consultas, operaciones o trámites en general, como por ejemplo, inversiones o planes de negocio.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo regulará la operación, administración y funcionamiento de la plataforma.

Artículo 5.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado:

1. Reemplázase el artículo 19²⁷ por el siguiente:

“Artículo 19. Utilización de medios electrónicos. Los procedimientos administrativos y las comunicaciones oficiales entre órganos de la Administración del Estado, se realizarán preferentemente a través de técnicas y medios electrónicos.

Un reglamento que será dictado por los Ministros de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia establecerá los requisitos, condiciones y medios a fin de asegurar los principios de seguridad de la información y los estándares de interoperabilidad de los procedimientos administrativos electrónicos. Asimismo, el Ministro o la Ministra de la Secretaría General de la Presidencia podrá dictar normas técnicas que regulen los requisitos de dicha naturaleza del procedimiento administrativo electrónico.

Sin perjuicio de que la ley pueda establecer procedimientos administrativos de carácter especial, si estos se tramitan electrónicamente deberán ajustarse a las normas técnicas y medios electrónicos determinados en la presente norma.”.

26 Ley Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Título II: Normas Especiales.

27 Artículo 19°, que se deroga:

Artículo 19. Utilización de medios electrónicos. El procedimiento administrativo podrá realizarse a través de técnicas y medios electrónicos. Los órganos de la Administración procurarán proveerse de los medios compatibles para ello, ajustándose al procedimiento regulado por las leyes.

2. Agrégase, en el literal a) del artículo 30²⁸, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser coma, la siguiente oración: “pudiendo para estos efectos indicar una dirección de correo electrónico, caso en el cual se entenderá este como domicilio válido a efectos de practicar las notificaciones.”.

3. Reemplázase el artículo 46²⁹, por el siguiente:

“Artículo 46.- Procedimiento. Las notificaciones se harán por escrito, preferentemente a la casilla de correo electrónico que señalare el interesado en su primera presentación o con posterioridad. En este caso, se entenderá practicada al día siguiente de su despacho.

Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un funcionario del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho.

Asimismo, las notificaciones podrán también realizarse por carta certificada dirigida al domicilio que para tales efectos el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad de conformidad a la letra a) del artículo 30³⁰.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos de Chile que corresponda.

La exactitud y debida actualización de la referida casilla electrónica y/o del domicilio será responsabilidad exclusiva del interesado.

Además, los interesados serán responsables de revisar en la casilla de correo electrónico la recepción de alguna notificación. El interesado deberá mantener y configurar su dirección electrónica de forma que las notificaciones electrónicas sean debidamente recibidas. El incumplimiento de dichas obligaciones no afectará en modo alguno lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo.

Lo establecido respecto de las notificaciones electrónicas en la presente ley es sin perjuicio de aquellas que se consideren en las normas que regulen procedimientos administrativos especiales.”.

- 28 La letra a) del artículo 30° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 30. Inicio a solicitud de parte. En caso que el procedimiento se inicie a petición de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones, pudiendo para estos efectos indicar una dirección de correo electrónico, caso en el cual se entenderá este como domicilio válido a efectos de practicar las notificaciones.

- 29 Artículo 46°, que se deroga:

Artículo 46. Procedimiento. Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o servicio de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

- 30 Letra a) del artículo 30°, vigente:

Artículo 30. Inicio a solicitud de parte. En caso que el procedimiento se inicie a petición de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 22 de la ley N° 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos:

1. Reemplázase el numeral 2, por el siguiente:

“2.- Las resoluciones que sean dictadas durante el procedimiento administrativo descrito en este artículo, deberán notificarse al presunto infractor. Esta actuación deberá constar en el expediente administrativo.

Las notificaciones se practicarán:

- a) De modo personal, por medio de un funcionario de la Unidad designado para tales efectos por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, y que tendrá carácter de ministro de fe, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio que el presunto infractor tenga registrado en la Unidad o en aquél que ejerza su profesión o industria, en las dependencias de la Unidad o en cualquier lugar de acceso público, dejando constancia de tal hecho.
- b) Mediante carta certificada que se enviará al domicilio que el presunto infractor tenga registrado en la Unidad o en aquel que haya designado ante ésta. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos de Chile que corresponda al domicilio del notificado.
- c) A la casilla de correo electrónico que el eventual infractor tenga registrada ante la Unidad de Análisis Financiero, y que corresponda indistintamente al representante legal o al Oficial de Cumplimiento. En este caso, la notificación se entenderá practicada al día siguiente de su despacho.

Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto administrativo correspondiente debidamente notificado si el interesado o fiscalizado a quien afectare hiciere cualquier gestión, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad.”.

2. Elimínase el numeral 3³¹.

31 Numeral 2 y 3 del artículo 22°, que se derogan:

Artículo 22.- Los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones administrativas previstas en este Título, se sujetarán a las siguientes reglas:

- 2.- La notificación de la resolución que da inicio al procedimiento administrativo descrito en este artículo se efectuará personalmente, de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, entregándose copia íntegra al presunto infractor o a su representante legal, y podrá practicarse tanto en el domicilio que tenga registrado en la Unidad o en aquél que ejerza su profesión o industria, en el que haya designado ante el Servicio de Aduanas cuando corresponda, en las dependencias de la Unidad, o en cualquier lugar de acceso público. La notificación personal será practicada por un funcionario de la Unidad, designado al efecto por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, y que tendrá carácter de ministro de fe.
- 3.- Las demás notificaciones que tengan lugar en el procedimiento se efectuarán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio del requerido registrado en la Unidad o en aquél que ejerza su profesión o industria, o en el caso de las personas indicadas en el artículo 4°, en el designado ante el Servicio de Aduanas. Las notificaciones se entenderán practicadas a contar del quinto día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego:

1. Agrégase el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis.- Las notificaciones que la Superintendencia de Casinos de Juego deba practicar en el ejercicio de sus funciones podrán efectuarse:

- a) De modo personal, por medio de un funcionario de la Superintendencia, y que tendrá carácter de ministro de fe, quien entregará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado o en las dependencias de la Superintendencia si el interesado se apersonare a recibirla, dejando constancia de tal hecho.
- b) Mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado haya informado a la Superintendencia en su primera presentación o en una posterior. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos de Chile que corresponda al domicilio del notificado.
- c) A la casilla de correo electrónico que el interesado haya informado en su primera presentación o haya registrado ante la Superintendencia de conformidad a las instrucciones que ésta dicte al efecto. En este caso, se entenderá practicada al día siguiente de su despacho.

Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto administrativo correspondiente debidamente notificado si el interesado o fiscalizado a quien afectare hiciere cualquier gestión, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad.”.

2. Reemplázase el inciso tercero del artículo 32, por el siguiente:

“La resolución deberá ser notificada al operador o a su apoderado por alguna de las modalidades de notificación contempladas en el artículo 3 bis³² de la presente ley. En caso que ninguna de dichas modalidades fuera aplicable se procederá a fijar cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.”³³.

32 Artículo modificado en el numeral anterior.

33 El artículo 32° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 32.- El Superintendente iniciará el procedimiento de revocación cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior. Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

~~La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora. La resolución deberá ser notificada al operador o a su apoderado por alguna de las modalidades de notificación contempladas en el artículo 3 bis de la presente ley. En caso que ninguna de dichas modalidades fuera aplicable se procederá a fijar cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.~~

El Superintendente podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del casino de juego, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

3. Modifícase el artículo 55 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el literal b), por el siguiente:

“En caso de instrucción de oficio, el procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificará al presunto infractor por alguna de las modalidades de notificación contempladas en el artículo 3 bis³⁴ de la presente ley.”.

b) Reemplázase el literal d), por el siguiente:

“Las notificaciones se harán por alguna de las modalidades de notificación contempladas en el artículo 3 bis.”³⁵.

Artículo 8.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas:

1. Reemplázase el epígrafe segundo del Título Preliminar, por el siguiente: “2.- Plazos y notificaciones”³⁶.

2. Agrégase el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. Todas las resoluciones, actos administrativos, formulación de observaciones, cargos, giros y demás comunicaciones y actuaciones que se dicten, emitan o efectúen por la Dirección Nacional Servicio Nacional de Aduanas, sus Direcciones Regionales y Administraciones de Aduanas, podrán notificarse por cualquiera de las siguientes formas:

1. Mediante carta certificada dirigida al domicilio que señalare el interesado o se hubiere registrado ante el Servicio, la cual se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de Correos de Chile que corresponda.
2. De forma personal, por medio de un funcionario del Servicio, designado para tales efectos por el Jefe del Servicio, y que tendrá carácter de ministro de fe, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado o en aquél que ejerza su profesión o industria, o en las dependencias del Servicio si el interesado se apersonare a recibirla, dejando constancia de tal hecho.

34 Artículo modificado en el numeral 2 del presente artículo.

35 La letra b) y d) del artículo 55°, que se derogan:

Artículo 55.- Los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones administrativas previstas en esta ley, se sujetarán a las siguientes reglas:

b) En caso de instrucción de oficio, el procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificará al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia.

La formulación de cargos señalará una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos

d) Las notificaciones se harán por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio del presunto infractor registrado en la Superintendencia.

36 Epígrafe segundo del Título Preliminar, que se deroga:

2.- Plazos

3. A la casilla de correo electrónico u otras técnicas y medios electrónicos equivalentes, que señalare el interesado o tuviere registrada ante el Servicio. En este caso, se entenderá practicado al día siguiente de su despacho. Lo anterior, sin perjuicio de ser aplicable, además, la forma de notificación prevista en el artículo 93³⁷ de esta Ordenanza.

Todas las notificaciones se verificarán entregando o remitiendo, según se trate, copia íntegra del documento que se pretende comunicar.

Para los efectos descritos en el inciso precedente, todo interesado en su primera presentación, deberá fijar un domicilio y señalar una dirección de correo electrónico o la técnica o medio electrónico equivalente para ser notificado. En caso que así no se hiciere, la autoridad aduanera respectiva podrá requerir al interesado para que dé cumplimiento a dicha obligación, dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. La referida designación se considerará subsistente mientras no se informe al Servicio de su reemplazo o modificación. Cuando el procedimiento se inicie por actuación del Servicio o si el interesado no fija domicilio ni señala una dirección de correo electrónico o la técnica o medio electrónico equivalente, la notificación se efectuará al domicilio o dirección de correo electrónico informados o mediante las técnicas o medios electrónicos equivalentes previamente comunicados a la Aduana.

Sin perjuicio de existir reglas especiales de notificación en la presente Ordenanza o en las disposiciones legales y reglamentarias de orden tributario y técnico, cuya aplicación y fiscalización correspondan al Servicio Nacional de Aduanas, las notificaciones indicadas en este artículo serán siempre aplicables.”.

Artículo 9.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 2 del artículo 29³⁸ de la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio:

1. Agrégase, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Al efecto, desarrollará, conforme a sus disponibilidades presupuestarias, un sistema documental digital. Para efectos archivísticos, las siguientes son las etapas generales del ciclo documental dentro de la Administración del Estado: Fase activa se refiere a la producción o recepción del documento en cada servicio público, así como su utilización para los fines pertinentes; Fase Semiactiva corresponde a la conservación temporal del documento al interior de cada servicio público; y finalmente, el documento se transferirá al Archivo Nacional, si procede, para su preservación y disponibilización.”.

37 Artículo 93°, vigente:

Artículo 93.- Las declaraciones legalizadas y las denuncias cursadas serán notificadas diariamente mediante su inclusión en un estado que llevará cada Aduana.

38 Numeral 2 del artículo 29°, vigente:

Artículo 29.- Las siguientes instituciones patrimoniales nacionales serán parte integrante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y se relacionarán directamente con el Director Nacional:

2. El Archivo Nacional, que tendrá como misión reunir, organizar, preservar, investigar y difundir el conjunto de documentos, independientemente de su edad, forma o soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona, familia o institución en el curso de sus actividades y funciones, así como todos aquellos documentos relevantes para la historia y desarrollo del país.

2. Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Mediante un reglamento emitido a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y suscrito por los Ministros de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, se establecerán los estándares técnicos y administrativos que deberá cumplir un sistema documental digital. Sin perjuicio de ello, para efectos de que se integren al sistema documental digital los documentos originados en papel y digitalizados, dicho sistema deberá cumplir con los estándares a que se refiere la ley N° 18.845³⁹ y su reglamento”.

Artículo 10.- Agrégase, en el artículo 14⁴⁰ del decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, sobre instituciones nacionales patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, los siguientes incisos penúltimo y final, nuevos:

“Los documentos enumerados en el presente artículo podrán ser enviados por los órganos obligados, y almacenados por el Archivo Nacional, en formato digital, conforme se regula en la ley N° 18.845⁴¹ y su reglamento.

Para ejecutar las acciones de respaldo digital, almacenamiento y disponibilidad de los documentos, tanto los órganos obligados a enviar la documentación como el Archivo Nacional podrán utilizar los medios de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Al efecto deberán ajustarse a los estándares a que se refiere la ley N° 18.845⁴² y su reglamento.”.

39 Ley que establece sistemas de microcopia o micrograbación de documentos.

40 Artículo 14°, vigente:

Artículo 14. Ingresarán anualmente al Archivo Nacional:

- a) Los documentos de los Departamentos de Estado que hayan cumplido cinco años de antigüedad;
- b) Los documentos de las Intendencias y Gobernaciones que hayan cumplido sesenta años de antigüedad;
- c) Los libros de actas de las Municipalidades que tengan más de sesenta años de antigüedad;
- d) Los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los expedientes judiciales que hayan cumplido ochenta años de antigüedad;
- e) Los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los expedientes judiciales de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de los Territorios de Aysén y Magallanes, que hayan cumplido treinta años de antigüedad.

En el mes de Marzo de cada año, los Subsecretarios de Estado, los Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, Presidentes de Junta de Vecinos, Notarios, Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas, Archiveros Judiciales y Jueces dispondrán el envío al Archivo Nacional de los documentos que reúnan las condiciones anteriormente señaladas. Los funcionarios mencionados que no den cumplimiento a esta disposición incurrirán en una multa de diez pesos por cada día de atraso. Esta multa se impondrá por el Presidente de la República, en vista del denuncia de la Dirección General, y su producido incrementará los fondos de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

No obstante, la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva.

No será aplicable a dicho Ministerio ni a las Instituciones u Organismos referidos en este inciso, el artículo 18 de esta ley.

41 Ley que establece sistemas de microcopia o micrograbación de documentos.

42 Ibid.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.845, que establece sistemas de microcopia o micrograbación de documentos:

1. Intercálase, en el artículo 1^o⁴³ el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“En esta ley también se entiende comprendidos la aplicación de otros sistemas electrónicos que permitan digitalizar documentos de acuerdo a los estándares fijados en un reglamento dictado para tal efecto, el que será dictado por el Ministerio de Hacienda, y suscrito además por el Ministro Secretaría general de la Presidencia y el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”.
2. Agrégase, en el artículo 3^o⁴⁴ el siguiente inciso final, nuevo:

“Para la digitalización de documentos, el acta a que hace referencia el inciso tercero será un documento electrónico que deberá ser firmado por el ministro de fe mediante firma electrónica avanzada y que se archivará digitalmente junto con el documento digitalizado.”.

43 Artículo 1°, vigente:

Artículo 1°.- Para los efectos de esta ley, microforma es cualquier alternativa de formatos de películas fotográficas, microfilmes u otros elementos análogos que contengan imágenes de documentos originales como producto del proceso de microcopia o micrograbado y que sean susceptibles de ser reproducidos. El mérito probatorio de las microformas que se obtengan, se regirá por las disposiciones de esta ley.

44 Artículo 3°, vigente:

Artículo 3°.- El proceso de microcopia o micrograbado de documentos pertenecientes a la administración pública centralizada y descentralizada y de registros públicos deberá hacerse en presencia del funcionario encargado del archivo o registro respectivo, quien actuará como ministro de fe.

La microforma respectiva deberá comenzar reproduciendo un acta de apertura, en la cual se dejará constancia de la fecha de la diligencia, de la identidad del ministro de fe y de una declaración de éste relativa al estado de conservación del o de los documentos originales, con indicación de cualquier observación acerca de enmendaduras, raspaduras, adiciones, apostillas, entrerrenglonaduras y otras alteraciones que puedan apreciarse a simple vista en el documento original y que no se encontraren salvadas en éste.

La microforma deberá reproducir como término de ella un acta de cierre emanada del ministro de fe, en la cual se estamparán la firma y un signo, sello o timbre indeleble y auténtico de dicho funcionario. El original de ambas actas se mantendrá en el archivo o registro respectivo.

Al procederse a la microcopia o micrograbado de documentos pertenecientes a archivos o registros públicos en que la ley ordene o permita practicar anotaciones marginales, el funcionario que tenga a su cargo el archivo o registro deberá abrir una sección especial de los libros o protocolos que lo formen. En dicha sección se practicarán las anotaciones marginales que habría correspondido hacer en los registros originales que se destruyan. El método de microcopia o micrograbado deberá consultar en las respectivas actas de cierre, las referencias necesarias a la sección especial de los libros o protocolos antes aludidos y al índice a que se refiere el inciso siguiente, que permitan establecer la existencia de las anotaciones marginales que se hayan practicado o que se puedan practicar en el futuro.

Las microformas y los originales de las actas de apertura y cierre a que aluden los incisos segundo y tercero de este artículo se conservarán en poder del funcionario que tenga a su cargo el archivo o registro público que corresponda y formarán parte integrante de dicho archivo o registro. Para mantener la unidad de éstos, el proceso de microcopia o micrograbado deberá contemplar los medios técnicos adecuados para llevar el índice de las partidas o inscripciones y para remitirse a las inscripciones, cancelaciones y anotaciones marginales y demás actuaciones relacionadas con unas u otras, existentes al tiempo de procederse a la microcopia o micrograbado o que se practiquen con posterioridad a ella.

En caso de pérdida o extravío de las actas de que trata este artículo, se procederá a su reconstitución conforme al procedimiento que deba seguirse para análoga situación respecto de los documentos originales que integren el archivo o registro que corresponda.

La impugnación de las microformas y la de sus reproducciones se sujetarán a las prescripciones del derecho común sobre impugnación de documentos. Servirán como medio de prueba de su autenticidad o integridad las actas de que trata este artículo.

[...].

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.659, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales:

1. Reemplázase el artículo 9⁴⁵ por el siguiente:

“Artículo 9.- Para efectos del llenado de los formularios señalados en los artículos precedentes, el constituyente, socios o accionistas podrán completarlos autenticándose previamente en el Registro y cumplir los requisitos que al efecto señale el Reglamento.”.

2. Agrégase, en el artículo 14⁴⁶, el siguiente inciso final, nuevo:

“El registro de accionistas de las sociedades anónimas y de las sociedades por acciones creadas de conformidad a esta ley, podrán ser llevados en formato electrónico dentro del Registro, de conformidad a lo establecido en el Reglamento.”.

45 Artículo 9°, que se deroga:

Artículo 9°.- Para efectos de la suscripción de los formularios respectivos, el constituyente, socios o accionistas deberán completarlos previamente en el Registro y deberán cumplirse las demás disposiciones que al efecto señale el Reglamento.

La suscripción de los formularios se realizará mediante la firma del constituyente, socios o accionistas, según sea el caso, a través de la firma electrónica avanzada de éstos, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

El constituyente, socio o accionista que no cuente con firma electrónica avanzada deberá suscribir los formularios ante un notario. En este caso, el notario deberá estampar su firma electrónica avanzada en el formulario de que se trate, entendiéndose de esta forma suscrito el formulario por parte del constituyente, socio o accionista para todos los efectos. Con todo, el constituyente, socios o accionistas, en su caso, podrá concurrir a la suscripción del respectivo formulario por medio de representante legal o de apoderado. En este último caso, el mandato deberá ser otorgado por escritura pública, dejándose constancia en el formulario de la fecha, nombre y domicilio del notario ante el cual se otorgó y del número de repertorio de la correspondiente escritura. En estos casos, la suscripción de los formularios sólo podrá realizarse ante un notario, quien deberá verificar el cumplimiento de las normas que a este respecto disponga el Reglamento y dejar constancia del instrumento en el que consta la personería en virtud de la cual actúa el apoderado o del documento que acredita dicha representación, según sea el caso. Una copia digital íntegra de éste o de aquél, según corresponda, deberá incorporarse al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva.

En los casos antes señalados, deberá dejarse constancia en el formulario del nombre y domicilio del ministro de fe ante quien se firme, así como de la fecha del respectivo acto de suscripción. El Reglamento determinará la forma en que se deberá acreditar en estos casos la firma de los formularios por parte del constituyente, socios o accionistas, o su apoderado o representante legal, según corresponda.

Los constituyentes, socios o accionistas podrán designar en el formulario de constitución o en cualquier otro que al efecto disponga el Registro, a un mandatario para que actúe en representación de todos ellos, para los efectos de suscribir con su firma electrónica avanzada o ante notario los formularios de que se trate.

Los notarios sólo podrán cobrar por la firma electrónica avanzada que estampen la tarifa fijada mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, emitido bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República" y suscrito, además, por el Ministro de Justicia.

46 Artículo 14°, vigente:

Artículo 14.- Las personas jurídicas acogidas a esta ley serán modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas y disueltas, mediante la sola suscripción del formulario respectivo, según el acto que haya de celebrarse, y su incorporación al Registro.

La suscripción de esos formularios será realizada por el titular o, en su caso, por quienes sean los titulares de los derechos sociales o acciones emitidas con derecho a voto al tiempo de celebrarse dicho acto, o por sus apoderados o representantes legales, debiendo para tales efectos sujetarse a lo señalado en el Título III de esta ley.

En los casos en que para adoptar acuerdos sobre las materias señaladas en el inciso primero se requiera la celebración de una junta, el acta que se levante, previo cumplimiento de las formalidades que sean necesarias, deberá ser reducida a escritura pública o protocolizada, según corresponda. Una copia digital íntegra de ésta deberá incorporarse al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva.

Los acuerdos que se adopten por los socios o accionistas de las sociedades que se acojan a esta ley deberán incorporarse en los formularios, indicándose las nuevas cláusulas de los estatutos y aquellas que se modifiquen o sustituyan.

En caso que algún otro acto deba ser reducido a escritura pública o protocolizado, el notario respectivo o el titular o, en su caso, quienes sean los titulares de los derechos sociales o acciones emitidas con derecho a voto al tiempo de celebrarse dicho acto, o sus apoderados o representantes legales, deberán, en la forma que disponga el Reglamento, incorporar una copia digital del mismo al Registro, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la escritura pública o de la protocolización, según corresponda.

Artículo 13.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, cuyo texto refundido y sistematizado se encuentra en el decreto ley N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:

1. Reemplázase el inciso quinto⁴⁷, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar de manera inmediata patente provisoria por un plazo de un año, pudiendo los establecimientos comenzar a funcionar desde su otorgamiento. Para el otorgamiento de la patente provisoria se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Acompañar autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989⁴⁸; c) En el

47 Inciso 5°, de artículo 26°, que se deroga:

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.

48 Decreto de Ley que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa.

- 1°.- Determinanse las siguientes materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario requieren autorización sanitaria expresa:
 - 1.- Clínicas.
 - 2.- Hospitales.
 - 3.- Laboratorios Clínicos.
 - 4.- Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor.
 - 5.- Laboratorios de Salud Pública.
 - 6.- Instalación, funcionamiento y traslado de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano.
 - 7.- Instalación, funcionamiento y traslado de farmacias homeopáticas y de farmacias de urgencia.
 - 8.- Sector del local de la farmacia que haya de destinarse a la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, sean o no de productos homeopáticos.
 - 9.- Transferencia o destrucción de productos farmacéuticos estupefacientes o psicotrópicos, en caso de cierre de farmacias, droguerías y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano.
 - 10.- Registro de medicamentos, cosméticos y pesticidas de uso doméstico.
 - 11.- Textos y publicidad de medicamentos y pesticidas de uso doméstico.
 - 12.- Comercialización de medicamentos sin registro para investigación científica y ensayos clínicos.
 - 13.- Envase y rotulación de productos farmacéuticos.
 - 14.- Modificación de registros (cambio de fórmulas, formas farmacéuticas y otros).
 - 15.- Series de productos biológicos sometidos a este control.
 - 16.- Fabricación, importación, internación, distribución, transferencia, posesión o tenencia de productos estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias que causen efectos análogos conforme a la reglamentación vigente.
 - 17.- Previsiones anuales de importación y exportación de productos estupefacientes y psicotrópicos.
 - 18.- Importación o exportación de productos estupefacientes y psicotrópicos comprendidos en las previsiones anuales.
 - 19.- Uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas prohibidas para fines de investigación científica.
 - 20.- Local, funcionamiento y traslado de Laboratorios de producción químico farmacéutica y Laboratorios externos de control de calidad.
 - 21.- Instituciones de control y certificación de calidad de elementos de protección personal contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 - 22.- Funcionamiento de obras destinadas a la provisión o purificación de agua potable de una población o a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros.
 - 23.- Uso de aguas servidas en riego agrícola, de acuerdo al grado de tratamiento de depuración o desinfección aprobado por la autoridad sanitaria.
 - 24.- Labores mineras en sitios donde se extrae agua subterránea para uso sanitario o en lugares cuya explotación pueda afectar el caudal o la calidad natural del agua destinada a usos sanitarios.
 - 25.- Instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.
 - 26.- Instalación y funcionamiento de cementerios públicos o privados, crematorios e incineradores de desechos biológicos.
 - 27.- Fabricación de subproductos de aguas minerales.
 - 28.- Internación y/o transporte internacional de cadáveres o restos humanos.

caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el precitado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la autoridad sanitaria. Si transcurrido el plazo de un año, contado desde el otorgamiento de la patente provisoria, los contribuyentes no cumplen con todas las exigencias que las disposiciones legales determinen para su funcionamiento, la Municipalidad deberá decretar la clausura del establecimiento.”.

2. Modifícase el inciso sexto⁴⁹ de la siguiente forma:

- a) Reemplázase la oración “Las municipalidades podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos señalados en las letras b) y d) del inciso precedente, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto.”, por la siguiente: “En el caso que se otorgue una patente provisoria para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con el requisito señalado en la letra b)⁵⁰ del inciso precedente, se podrá eximir la exigencia de la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto.”.
- b) Reemplázase la expresión “determinado, el cual no podrá exceder de un año contado desde la fecha en que se otorgue la patente provisoria”, por la siguiente: “de vigencia de un año de la patente provisoria”.

-
- 29.- Instalación, ampliación o modificación de balnearios, baños públicos y de funcionamiento y modificación de piscinas públicas que usen aguas de fuentes no autorizadas sanitariamente.
 - 30.- Instalación, funcionamiento, ampliación o modificación de establecimientos destinados a producción, elaboración y/o envase de alimentos y de establecimientos destinados al almacenamiento, distribución y/o venta de alimentos que necesiten refrigeración.
 - 31.- Instalación, funcionamiento, ampliación o modificación de establecimientos destinados a la elaboración, manipulación o consumo de alimentos.
 - 32.- Mataderos y frigoríficos.
 - 33.- Destrucción, procesamiento y exportación de decomisos por mataderos.
 - 34.- Desnaturalización de alimentos destinados a uso industrial no alimentario o alimentación animal.
 - 35.- Enajenación de alimentos procedentes de rezagos de aduana, empresas de transporte, salvatajes de incendios, catástrofes y desastres.
 - 36.- Operación instalaciones radiactivas 2da. y 3ra. categoría.
 - 37.- Cierre temporal o definitivo de instalaciones radiactivas 2da. categoría.
 - 38.- Operación equipos generadores radiaciones ionizantes móviles.
 - 39.- Personas que se desempeñan en instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes.
 - 40.- Importación, exportación, venta, distribución, almacenamiento y abandono o desecho de sustancias radiactivas.
 - 41.- Empresas aplicadoras de pesticidas.
 - 42.- Fabricación y/o importación de plaguicidas.
 - 43.- Importación y/o fabricación de sustancias químicas peligrosas para la salud.
 - 44.- Acumulación y disposición final de residuos dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo cuando los residuos sean inflamables, explosivos o contengan algunos de los elementos o compuestos señalados en el artículo 13 del "Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo".
 - 45.- Expertos en Prevención de Riesgos Ocupacionales.
 - 46.- Profesionales para efectuar revisiones y pruebas de calderas y generadores de vapor.

49 El inciso 6°, del artículo 26°, quedaría con la siguiente redacción:

~~Las municipalidades podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos señalados en las letras b) y d) del inciso precedente, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto. En el caso que se otorgue una patente provisoria para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con el requisito señalado en la letra b) del inciso precedente, se podrá eximir la exigencia de la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto.~~ Las municipalidades sólo podrán incorporar en dicha ordenanza los tipos de actividades previamente autorizadas por la autoridad competente, la que deberá señalar, además, las características y condiciones que aquellas deben cumplir. Las municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito de que se trate dentro de un plazo determinado, el cual no podrá exceder de un año contado desde la fecha en que se otorgue la patente provisoria de vigencia de un año de la patente provisoria.

50 Letra modificada en el numeral anterior.

Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1. Reemplázase, en el artículo 12⁵¹, la expresión “la notificación administrativa del reclamante”, por “la fecha de la publicación de los actos administrativos en la plataforma digital que mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para dichos efectos”.
2. Intercálase, en el artículo 20⁵², el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:
 “Para la determinación de la sanción en cada caso se considerarán las siguientes circunstancias:
 - a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado.
 - b) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiere.
 - c) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.
 - d) La conducta anterior del infractor y su capacidad económica.
 - e) Todo otro criterio que, a juicio fundado del Juzgado de Policía Local, sea relevante para la determinación de la sanción.”.
3. Modifícase el artículo 116 de la siguiente forma:
 - a) Reemplázase el inciso décimo⁵³, por el siguiente:

51 El artículo 12° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 12.- La Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los Directores de Obras. El reclamo deberá ser interpuesto en el plazo de 30 días, contados desde ~~la notificación administrativa del reclamante~~ la fecha de la publicación de los actos administrativos en la plataforma digital que mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para dichos efectos, aplicándose en este caso el procedimiento previsto en el artículo 118.

52 Artículo 20°, vigente:

Artículo 20.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a cien unidades tributarias mensuales. Todo lo anterior es sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada en esta ley o en otra.

La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva o cualquier persona podrán denunciar ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, el incumplimiento de las disposiciones aludidas en el inciso anterior. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios de que se disponga.

Las acciones relativas a las infracciones a que se refiere este artículo, prescribirán al momento de la recepción de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales.

53 Inciso 10°, del artículo 116°, que se deroga:

La Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos.

“La Dirección de Obras Municipales deberá publicar en su sitio web y en el sistema de información regulado por la ley de transparencia del mercado del suelo las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo, en un plazo que no debe exceder los tres días hábiles desde su otorgamiento. Asimismo, deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina de dichos permisos o autorizaciones, debiendo, además, informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos.”.

- b) Agréganse los siguientes incisos undécimo, duodécimo y décimo tercero, nuevos:

“Los permisos y certificados que deba otorgar el Director de Obras Municipales a que se refiere esta ley, deberán tramitarse en forma electrónica, sobre la base de una plataforma digital que mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las solicitudes y los actos administrativos de la Dirección de Obras Municipales que deriven de ellos, serán de acceso público.

A través de la misma plataforma deberán tramitarse los reclamos que puedan presentarse ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en contra de los actos de las Direcciones de Obras Municipales.

La plataforma a que se refieren los incisos anteriores deberá entregar, en formato de datos abiertos, información acerca de la cantidad y tipo de solicitudes que se presenten en cada Dirección de Obras, su tiempo de tramitación y la identidad de los solicitantes.”.

4. Reemplázase, el artículo 116 bis C⁵⁴, por el siguiente:

“Artículo 116 bis C).-Aprobado por el Director de Obras Municipales un permiso de edificación, de loteo o de cambio de destino de un edificio existente, el propietario deberá instalar, dentro del plazo de 5 días, un letrero visible en el predio a que se refiere, donde se informe sobre los aspectos principales del proyecto, incluyéndose los profesionales responsables, el tipo de permiso, el destino de la obra, su altura y las normas de excepción a las que se acoge, si correspondiere, además de las otras menciones que señale la Ordenanza General.

54 Artículo 116° bis C, que se deroga:

Artículo 116 bis C.- Aprobado por el Director de Obras Municipales un anteproyecto u otorgada una autorización para subdividir, o un permiso de edificación, de urbanización o de cambio de destino de un edificio existente, el propietario podrá informar al público sobre dicha gestión administrativa, para lo cual deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obras Municipales que se acoge al procedimiento de publicidad que regula este artículo.

La Ordenanza General establecerá la forma, plazo y condiciones mediante las cuales se podrá informar al público, al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente de la aprobación a que alude el inciso anterior. Entre dichas medidas, se considerará la instalación de un letrero visible en el lugar de la obra, la comunicación por escrito a los vecinos afectados y la comunicación a través de algún medio masivo, como radio o periódico, de acuerdo a las características de los proyectos. En todo caso, se deberá contemplar, como último trámite, la obligación de publicar un aviso en el Diario Oficial, el cual dará a conocer a la comunidad las características esenciales de la actuación de que se trate, la que se presumirá de derecho conocida desde la publicación del mencionado aviso.

Transcurridos treinta días desde la publicación a que se refiere el inciso anterior, la Municipalidad, a petición de parte, emitirá un certificado en que deje constancia que, hasta la fecha de su emisión, no han ingresado reclamos ni se le han notificado judicialmente recursos que recaigan sobre la gestión publicitada.

Tratándose de proyectos que afecten el interés general de la comunidad será necesario, además:

- a) Instalar un letrero visible en el predio dentro de los cinco días posteriores al ingreso del proyecto, que advierta del ingreso de la solicitud y que incluya las menciones que señale la Ordenanza General.
- b) Publicar el permiso en el Diario Oficial dentro de los diez días posteriores a su otorgamiento, momento a partir del cual se presumirá de derecho conocido por todos.

Se entenderá que afectan al interés general los edificios de uso público y los demás proyectos que determine la Ordenanza General."

Artículo 15.- Agréganse los siguientes incisos tercero a séptimo, nuevos, en el artículo 2455 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades:

"El Jefe de esta unidad, será nombrado por el Alcalde previo concurso público.

El nombramiento se efectuará de entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al establecido en la ley N° 19.88256 para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico. Lo no previsto en dicha ley se regulará mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda. Los gastos en que se incurran para la realización de los procedimientos de selección, se cargarán a la partida presupuestaria respectiva de cada municipalidad.

55 Artículo 24°, vigente:

Artículo 24.- A la unidad encargada de obras municipales le corresponderán las siguientes funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:
 - 1) Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes de predios en las áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
 - 2) Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
 - 3) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y
 - 4) Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan;
- c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización
- d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna;
- e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre los informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y Transporte Públicos Municipal respectiva;
- f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros, y
- g) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.

Quien ejerza la jefatura de esta unidad deberá poseer indistintamente el título de arquitecto, de ingeniero civil, de constructor civil o de ingeniero constructor civil.

56 Ley que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Para estos efectos se constituirá un comité de selección que estará integrado por el Alcalde o su representante; un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N°19.88257, o un representante de este Consejo elegido de una lista de profesionales aprobada por el propio Consejo; y el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región respectiva.

El Alcalde, previo informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, deberá definir el perfil profesional, el que deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos, los desafíos y lineamientos del cargo, debiendo incluir experiencia mínima y requisitos de especialización atendiendo el grado de complejidad de la comuna. Este perfil será aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Los nombramientos tendrán una duración de 5 años, al término de los cuales se deberá efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el titular en ejercicio. Estos concursos deberán realizarse con la anticipación necesaria para que el cargo no quede vacante.”.

Artículo 16.- Agrégase el siguiente artículo 68 bis, nuevo, en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional:

“Artículo 68 bis.- Los contratos que celebre el Congreso Nacional, incluidas sus corporaciones y servicios comunes, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y de su reglamentación.

Artículo 17.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios:

1. Agrégase, en el inciso tercero del artículo 1⁵⁸, a continuación de la expresión “Consejo Nacional de Televisión”, lo siguiente: “y al Congreso Nacional”.

57 Ibid.

58 El inciso 3°, del artículo 1°, quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 1°.- Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado.

Para los efectos de esta ley, se entenderán por Administración del Estado los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N°18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que señale la ley.

Esta ley también será aplicable al Consejo Nacional de Televisión y al Congreso Nacional.

2. Agrégase, en el párrafo primero del literal e) del artículo 3⁵⁹, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las licitaciones para la contratación de consultorías, asesorías y estudios referidos a la concesión de obras públicas y las licitaciones para la contratación de consultorías, asesorías, estudios y ejecución de obras públicas, que realice el Ministerio de Obras Públicas, por sí o por mandato, se desarrollarán a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública a que se refiere el artículo 19⁶⁰ de la presente ley; salvo casos excepcionales y fundados, autorizados previamente por el Director General de Obras respectivo. Todas las etapas que compongan los procesos de contratación, desde la publicación hasta la adjudicación, deberán desarrollarse íntegramente a través del Sistema de Información antes citado, salvo que concurra alguna de las hipótesis de excepción contempladas en el reglamento de esta ley. Las bases de licitación regularán los requisitos y formalidades para llevar a cabo los concursos públicos respectivos a través del Sistema de Información señalado. Con todo, lo dispuesto en este literal no alterará en otros aspectos lo establecido en la normativa propia del Ministerio de Obras Públicas referida a contratación de consultorías, asesorías, estudios y ejecución de obras públicas, y consultorías, asesorías y estudios referidos a la concesión de obras públicas.”.

3. Modifícase el artículo 6, de la siguiente forma:

- a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “presentes y futuros”, la siguiente frase: “, considerando, entre otros factores, el ciclo completo de vida del bien, servicio u obra”⁶¹.
- b) Agrégase, en el inciso final, a continuación de la palabra “contrataciones”, la siguiente frase “, a través de la utilización, en cada proceso, de una menor cantidad de recursos, monetarios y no monetarios, que permitan obtener los resultados buscados”⁶².

59 Letra e), del artículo 6°, vigente:

Artículo 3°.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley:

e) Los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas.

60 Artículo 19°, vigente:

Artículo 19.- Créase un Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que se aplicará a los organismos señalados en el artículo 1° de la presente ley, y que deberá estar disponible a todo el público, en la forma que regule el reglamento.

El Sistema de Información será de acceso público y gratuito.

61 El inciso 1°, del artículo 6° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 6°.- Las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros, considerando, entre otros factores, el ciclo completo de vida del bien, servicio u obra. En el caso de la prestación de servicios habituales, que deban proveerse a través de licitaciones o contrataciones periódicas, se otorgará mayor puntaje o calificación a aquellos postulantes que exhibieren mejores condiciones de empleo y remuneraciones. En las bases de licitación y en la evaluación de las respectivas propuestas se dará prioridad a quien oferte mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual y otras remuneraciones de mayor valor, tales como las gratificaciones legales, la duración indefinida de los contratos y condiciones laborales que resulten más ventajosas en atención a la naturaleza de los servicios contratados. Del mismo modo, se dará prioridad a las propuestas que garanticen los pagos a que alude el inciso quinto. Estas condiciones no podrán establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes, ni sólo atender al precio de la oferta.

62 El inciso 6°, del artículo 6° quedaría con la siguiente redacción:

En todo caso, la Administración deberá propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones, a través de la utilización, en cada proceso, de una menor cantidad de recursos, monetarios y no monetarios, que permitan obtener los resultados buscados.

4. Agrégase, en el inciso primero del artículo 18, a continuación de la expresión “procesos de adquisición”, la siguiente frase: “y ejecución contractual”⁶³.
5. Agrégase el siguiente artículo 21 bis, nuevo:

Los órganos del sector público que no estén regidos por esta ley y las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según lo establecido en la ley N° 19.862⁶⁴, respecto de tales fondos, podrán adherir voluntariamente al Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración y a los Convenios Marco suscritos por la Dirección de Compras y Contratación Pública. Tal adhesión deberán comunicarla previamente a dicha institución.”.
6. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 20, la frase “, recepción de las mismas; aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitación, así como los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, construcciones y obras”, por la siguiente: “y a la recepción de éstas; a las aclaraciones, a las respuestas y a las modificaciones a las bases de licitación; a los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, construcciones y obras; así como a todos los actos relativos a la ejecución contractual”⁶⁵.
7. Modifícase el artículo 30 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en el literal d)⁶⁶, el siguiente párrafo final, nuevo:

63 El inciso 1°, del artículo 18° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 18.- Los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y ejecución contractual y contratación de bienes, servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha utilización podrá ser directa o intermediada a través de redes abiertas o cerradas, operando en plataformas de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones, sea individualmente o acogiéndose a los beneficios de los contratos marco que celebre la señalada Dirección. Dicha actividad deberá ajustarse a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, en la ley de firma electrónica y en las normas establecidas por la presente ley y su reglamento.

64 Ley que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

65 El inciso 1°, del artículo 20° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 20.- Los órganos de la Administración deberán publicar en el o los sistemas de información que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, la información básica relativa a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento. Dicha información deberá ser completa y oportuna refiriéndose a los llamados a presentar ofertas, recepción de las mismas; aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitación, así como los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, construcciones y obras y a la recepción de éstas; a las aclaraciones, a las respuestas y a las modificaciones a las bases de licitación; a los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, construcciones y obras; así como a todos los actos relativos a la ejecución contractual, todo según lo señale el reglamento.

66 Letra d), del artículo 30°, vigente:

Artículo 30.- Son funciones del Servicio las siguientes:

d) De oficio o a petición de uno o más organismos públicos, licitar bienes y servicios a través de la suscripción de convenios marco, los que estarán regulados en el reglamento de la presente ley. Respecto de los bienes y servicios objeto de dicho convenio marco, los organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán obligados a comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el contratista adjudicado por la Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. En este caso deberán mantener los respectivos antecedentes para su revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad fiscalizadora.

Los organismos públicos que obtuvieren por su propia cuenta condiciones más ventajosas sobre bienes o servicios respecto de los cuales la Dirección de Compras y Contratación Pública mantiene convenios marco vigentes, deberán informar de tal circunstancia a la Dirección. Con esta información, la Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para lograr la celebración de un convenio marco que permita extender tales condiciones al resto de los organismos públicos.

“Los contratos tipo contenidos en las bases de licitación de convenios marco se entenderán perfeccionados una vez notificada a través del Sistema de Información, la adjudicación respectiva, correspondiendo al adjudicatario actualizar en el Registro de Contratistas y Proveedores sus antecedentes legales y acompañar los demás documentos requeridos por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.”

- b) Intercálase, en el literal g)⁶⁷, entre las palabras “Promover” y “la máxima competencia”, la siguiente frase: “la innovación, así como”.
- c) Agréganse los siguientes literales i), j), k) y l), nuevos:
 - “i) Proponer las políticas sobre las compras y contrataciones regidas por esta ley, que promuevan la eficiencia, la transparencia, la probidad, la competitividad y buenas prácticas en las mismas.
 - j) Fomentar y proponer acciones para una mayor eficiencia y probidad en las compras públicas regidas por esta ley. Para ello podrá, entre otras acciones, desarrollar o incentivar procesos de compra colaborativa, centralizadamente o de manera coordinada con otros organismos públicos.
 - k) Monitorear, en el ámbito de sus facultades, los procedimientos de contrataciones y de ejecución contractual regidos por esta ley, a fin de promover la eficiencia, transparencia, probidad, competitividad y buenas prácticas en los mismos. Con la finalidad de colaborar con el buen desarrollo de los procedimientos de compra de las entidades monitoreadas, la Dirección podrá emitir informes dirigidos a éstas o a los organismos fiscalizadores, cuando resulte procedente.
 - l) Proponer formatos tipo de bases administrativas, a fin de que puedan ser utilizadas por las Entidades en sus propios procesos de compra, para la adquisición de bienes y servicios determinados.”

Artículo 18.- Facúltase a la Corporación de Fomento de la Producción, representada, para estos efectos, por su Vicepresidente Ejecutivo, para que participe en la formación, constitución o administración de personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, reguladas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil⁶⁸, cuyo fin sea:

1. La investigación aplicada, el desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías y la innovación; o

La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las municipalidades, sin perjuicio de que éstas, individual o colectivamente, puedan adherir voluntariamente a los mismos.

La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las Fuerzas Armadas y para las de Orden y Seguridad Pública, respecto de los bienes y servicios que respectivamente determinen el Director de Logística del Ejército, el Director General de los Servicios de la Armada, el Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, el Director de Logística de Carabineros y el Jefe de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones, de acuerdo a los criterios que al respecto defina el reglamento.

67 La letra g), del artículo 30° quedaría con la siguiente redacción:

g) Promover la innovación, así como la máxima competencia posible en los actos de contratación de la Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes. Además, deberá ejercer una labor de difusión hacia los proveedores actuales y potenciales de la Administración, de las normativas, procedimientos y tecnologías utilizadas por ésta.

68 Título XXXIII: De las personas jurídicas.

2. La provisión de bienes públicos, la generación de información de interés público, así como la elaboración de estándares y sistemas de certificación, como medio para fomentar la innovación, productividad y competitividad del país.

Del mismo modo, la Corporación estará facultada para participar en la disolución y liquidación de dichas entidades, con arreglo a sus estatutos, las que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°⁶⁹ de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no podrán ejercer potestades públicas.

Las entidades que se formen, en ningún caso podrán celebrar ninguna clase de operación que pueda comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado o sus organismos.

Para el cumplimiento de sus fines, las entidades formadas o constituidas podrán realizar estudios e investigaciones; prestar asesorías y servicios a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, con el objeto de fomentar la innovación, productividad y competitividad en sus respectivas áreas; concurrir a la formación o constitución de nuevas personas jurídicas, con o sin fines de lucro, para la explotación de los activos intangibles y tecnologías que resulten de las actividades desarrolladas, sin que dicha participación pueda superar un tercio del capital o de los derechos sociales, según corresponda; y, en general, realizar todas las actividades y celebrar toda clase de actos y contratos para el cumplimiento de éstos. El producto o resultado de las actividades desarrolladas por estas entidades, deberá destinarse íntegramente al desarrollo de los fines establecidos en sus estatutos.

Las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, de las que trata el presente artículo, estarán excluidas de la aplicación del artículo 1° del decreto ley N° 799, de 1974⁷⁰; del decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977⁷¹; y del artículo 9° del decreto ley N° 1.953, de 1977⁷².

Artículo 19.- Agregáse el siguiente artículo 14 bis, nuevo, a la ley N° 18.918 que establece la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional:

69 Artículo 6°, vigente:

Artículo 6°.- El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales.

Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno, ejercer potestades públicas.

70 Artículo 1°, vigente:

Artículo 1°.- Prohíbese, en días Sábados en la tarde, Domingos y festivos, la circulación de vehículos de propiedad fiscal, semifiscal, de organismos de administración autónoma o descentralizada y empresas del Estado, cualquiera que fuere su estatuto legal, de las Municipalidades, y de las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital, representación o participación, superiores al cincuenta por ciento. Igual prohibición regirá para los vehículos que cualquiera de las entidades u organismos señalados tomen en arriendo, usufructo, comodato, depósito o a otro título no traslativo de dominio.

Los Intendentes y Gobernadores, o Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, en su caso, estarán facultados para autorizar salidas específicas de estos vehículos en días Sábados en la tarde, Domingos o festivos, mediante autorización escrita, en casos calificados y tratándose del cumplimiento de cometidos funcionales impostergables. La norma establecida en los incisos primero y segundo no se aplicará respecto de aquellos vehículos que corresponden a reparticiones que, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, deben mantenerlos en circulación durante esos días. La autorización respectiva deberá darse mediante decreto supremo fundado del Ministerio que corresponda a la entidad y organismo al cual estén asignados dichos vehículos, el que deberá ser firmado, además, por el Ministro del interior.

71 Decreto con Fuerza de Ley que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública.

72 Artículo 9°, vigente:

Artículo 9°.- Las modificaciones de los sistemas de remuneraciones de los trabajadores de las empresas y entidades a que se refiere el artículo 3° del decreto ley N° 249, de 1973, se fijarán por resolución conjunta del Ministerio del Ramo, del de Economía, Fomento y Reconstrucción y del de Hacienda.

Artículo 14 bis.- Tratándose de los proyectos de ley susceptibles de causar un impacto relevante, los fundamentos que señala el artículo anterior incluirán, a modo de documento complementario llamado “Informe de evaluación de impacto regulatorio”, el análisis de los eventuales efectos, tanto cuantitativos como cualitativos del proyecto, esto es, los costos probables y beneficios esperados que podría tener, distinguiendo entre las consecuencias para el sector público y el privado.

El Presidente de la República instruirá a los ministros y ministras de Estado acerca de los criterios para determinar qué proyectos son susceptibles de causar un impacto económico y social relevante, y de la metodología de análisis para la correcta fundamentación de los mensajes y para la elaboración de los “Informes de evaluación impacto regulatorio”, la que podrá incluir, en su caso, la consulta pública de las ideas matrices del proyecto.

Tratándose de las mociones, cada una de las Cámaras determinará las materias señaladas en el inciso anterior en sus respectivos reglamentos.

El Presidente de la República, los diputados o senadores autores del proyecto podrán prescindir, fundadamente, del análisis de impactos cuantitativos del proyecto cuando manifiestamente produzca sólo impactos cualitativos, por razones de urgencia o cuando para el despacho del proyecto exista un plazo obligatorio. La justificación deberá fundarse únicamente en los criterios instruidos por el Presidente de la República o las respectivas Cámaras, según sea el caso.

Artículo 20.- Intercálase, en el artículo 1773 del decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las secretarías del Estado, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Los ministerios que, para la formulación de los decretos supremos que aprueban reglamentos, que los modifiquen o los deroguen, efectúen trámites de información pública o consulta pública, deberán acompañar los antecedentes respectivos junto al documento sometido a consideración del Presidente de la República.”.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1 del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la ley sobre Impuesto a la Renta:

1. Agrégase, en el inciso tercero del artículo 63°74, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Para efectos de acreditar la situación anterior, se deberá contar con un certificado de residencia

73 Artículo 17°, vigente:

Art. 17. El trámite de los decretos supremos será el siguiente: firma del Presidente de la República, cuando corresponda, o, en su caso, sólo del Ministro, numeración y anotación en el Ministerio de origen, examen y anotación en la Contraloría General, y comunicación a la Tesorería General, cuando se trate de compromisos para el Estado.

Ninguna oficina de Hacienda, Tesorería, Contaduría, etc., dará cumplimiento a decretos que no hayan pasado por el trámite antes indicado. El funcionario público que no dé cumplimiento a esta disposición perderá por este solo hecho su empleo. Para este efecto los jefes de servicios no serán considerados como tales.

74 Inciso 3°, del Artículo 63°, vigente:

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, los contribuyentes que imputen el crédito a que se refiere el inciso anterior, proveniente del saldo acumulado establecido en el numeral ii), de la letra d), del número 2.-, de la letra B), del artículo 14, deberán restituir a título de débito fiscal, una cantidad equivalente al

fiscal emitido por la autoridad competente del país respectivo. Se presumirá que el certificado acreditará la residencia fiscal del contribuyente durante el año comercial en que se emita.”.

2. Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 74°75, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Para efectos de acreditar la situación anterior, se deberá contar con un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente del país respectivo. Se presumirá que el certificado acreditará la residencia fiscal del contribuyente durante el año comercial en que se emita.”.
3. Agrégase, en la letra a) del numeral 2 del artículo 104, a continuación de la expresión “Ministerio de Hacienda”, la siguiente frase: “, pudiendo incluso en dicho decreto eximirse del cumplimiento de un plazo”76.

Artículo 22.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que contiene la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios:

1. Modifícase el numeral 10 de la letra B del artículo 12 de la siguiente forma:
 - a) Modifícase el párrafo primero del siguiente modo:
 - i. Reemplázase la frase “Los inversionistas, sean estos establecidos, residentes o domiciliados”, por la siguiente: “Las personas naturales o jurídicas, sean estas, residentes o domiciliadas”.
 - ii. Intercálase, entre la expresión “importados que” y la palabra “destinen”, la palabra “se”.

35% del monto del referido crédito. Para todos los efectos legales, dicho débito fiscal se considerará un mayor impuesto adicional determinado. La obligación de restitución no será aplicable a contribuyentes del impuesto adicional, residentes en países con los cuales Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación que se encuentre vigente, y del cual sean beneficiarios respecto de la imposición de las rentas retiradas, remesadas o distribuidas indicadas; en el que se haya acordado la aplicación del impuesto adicional, siempre que el impuesto de primera categoría sea deducible de dicho tributo, o se contemple otra cláusula que produzca este mismo efecto.

75 Inciso 4°, del Artículo 74°:

Si al término del ejercicio se determina que la deducción del crédito establecido en el artículo 63 resultare indebida, total o parcialmente, la empresa o sociedad deberá pagar al Fisco, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional, la diferencia de impuesto que resulte al haberse deducido un mayor crédito, sin perjuicio del derecho de la sociedad de repetir contra aquél. Esta cantidad se pagará en la declaración anual a la renta que deba presentar la empresa o sociedad, reajustada en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al de la retención y el mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la sociedad, oportunidad en la que deberá realizar la restitución.

76 La letra a), del numeral 2, del Artículo 104°, quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 104.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17°, número 8°, no constituirá renta el mayor valor obtenido en la enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos indicados en los siguientes números 1 y 2:

2.- Contribuyentes beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los contribuyentes que enajenen los instrumentos a que éste se refiere, cumpliendo con lo señalado en las letras a) o b) siguientes:

a) Que entre la fecha de adquisición y enajenación de los instrumentos haya transcurrido a lo menos un año, o bien, el plazo inferior que se fije mediante decreto expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por el Ministerio de Hacienda, pudiendo incluso en dicho decreto eximirse del cumplimiento de un plazo. En el caso de la primera dictación, de la modificación o reemplazo del señalado decreto, el plazo de permanencia que regirá para aquellos tenedores de bonos que hayan adquirido los títulos con anterioridad a su entrada en vigencia, será el menor entre el que falte por completar para cumplir con el que establece la ley o, en su caso, el que señala el decreto vigente al momento de la compra, y el plazo que señale el nuevo decreto que se dicte.

- b) Elimínase el párrafo segundo, pasando el actual tercero a ser segundo, y así sucesivamente.
- c) Modifícase, el actual párrafo tercero que ha pasado a ser segundo del siguiente modo:
 - i. Reemplázase la palabra “inversionista” por “petionario”.
 - ii. Elimínase, la siguiente oración: “En el caso de los inversionistas extranjeros, deberán acompañar a esta solicitud el certificado de inversionista extranjero a que se refiere el artículo 4°77 de la ley marco para la inversión extranjera directa en Chile.”⁷⁸.

77 Artículo modificado según se indica en el artículo siguiente.

78 El numeral 10, de la letra B), del artículo 12° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 12°- Estarán exentos del impuesto establecido en este Título:

B.- La importación de las especies efectuadas por:

10.- ~~Los inversionistas, sean estos establecidos, residentes o domiciliados.~~ Las personas naturales o jurídicas, sean estas, residentes o domiciliadas en el país o aquellos que califiquen como inversionistas extranjeros y las empresas receptores de inversión extranjera, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la ley marco para la inversión extranjera directa en Chile, respecto de los bienes de capital importados que se destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, entre otros, que impliquen inversiones por un monto igual o superior a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La exención a que se refiere este número, se aplicará únicamente respecto de la importación de bienes de capital que se destinen a proyectos de inversión que, por sus características de desarrollo, generen ingresos afectos, no afectos o exentos del impuesto establecido en el Título II de esta ley transcurridos, al menos, doce meses contados desde la internación al país o adquisición en Chile de los primeros bienes de capital cuya exención de Impuesto al Valor Agregado se solicite, o desde la dictación de la respectiva resolución de calificación ambiental otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental conforme lo dispuesto en la ley N° 19.300, o desde el otorgamiento de la concesión de uso oneroso de terreno otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales conforme a lo establecido en el decreto ley N° 1939 de 1977.

Para el otorgamiento de la exención a que se refiere este número, el ~~inversionista~~ petionario deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Hacienda, debiendo cumplir para tales efectos con los requisitos establecidos en este número. En el caso de los inversionistas extranjeros, deberán acompañar a esta solicitud el certificado de inversionista extranjero a que se refiere el artículo 4° de la ley marco para la inversión extranjera directa en Chile.

El Ministerio de Hacienda deberá pronunciarse respecto de la referida solicitud dentro del plazo de sesenta días corridos, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados. Si no lo hiciere al término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y dicho Ministerio deberá, sin más trámite, proceder a la emisión de una resolución en que se otorgue el beneficio, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que venció el plazo de sesenta días mencionado.

En caso que se presente una nueva solicitud de exención respecto de bienes de capital destinados a proyectos que se realicen por etapas, o que tengan por objeto complementar o expandir un proyecto de inversión sobre el cual se haya otorgado la exención en una etapa inicial, bastará, para que el Ministerio de Hacienda extienda dicha exención a los nuevos bienes de capital, que se acompañe copia de la resolución que haya otorgado la exención original y los antecedentes que permitan acreditar que se trata de distintas etapas de un mismo proyecto o de proyectos complementarios o de expansión.

Facúltase al Ministerio de Hacienda para que, mediante decreto supremo, precise las características de los bienes de capital y proyecto de inversión a que se refiere el presente número, así como la forma y procedimiento en que deberán presentarse los antecedentes que deban acompañarse para efectuar el análisis de la solicitud de exención a que se refiere este numeral.

El Ministerio de Hacienda deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos copia de la resolución que otorgue la exención y de los antecedentes presentados por el contribuyente, dentro del plazo de veinte días corridos contado desde la emisión de la referida resolución.

Cuando, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos determine que la exención ha sido otorgada sobre la base de documentos u otros antecedentes erróneos acompañados por el contribuyente, previa citación practicada conforme a lo dispuesto por el artículo 63 del Código Tributario, deberá liquidar el impuesto que hubiese correspondido aplicar de no haberse otorgado la exención, con los reajustes e intereses penales establecidos en el artículo 53 del mismo código. En este último caso, se podrán aplicar las sanciones establecidas en el número 20 de su artículo 97.

De la liquidación que se dicte, así como de la multa aplicada, el contribuyente podrá reclamar conforme al procedimiento general establecido en el Libro III del Código Tributario. El Impuesto al Valor Agregado que haya pagado el contribuyente con motivo de haberse dejado sin efecto la exención que establece este número, constituirá crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado del período en que se lleve a cabo el pago, en la medida que se trate de un contribuyente de este Título.

Cuando el contribuyente haya obtenido maliciosamente la exención de que trata este número, mediante la presentación de documentos u otros antecedentes erróneos, incompletos o falsos, será sancionado en la forma prevista en el párrafo segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario, sin perjuicio del pago del impuesto evadido, con los respectivos intereses penales y multas, el que, una vez pagado, no constituirá crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

2. Modifícase el artículo 36 de la siguiente forma:

- a) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, previo informe favorable del Instituto de Promoción de Exportaciones”, por la palabra “Hacienda”⁷⁹.
- b) Intercálanse los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser séptimo, y así sucesivamente:

“El Ministro de Hacienda, mediante resolución exenta, podrá autorizar a los exportadores para que se acojan a un sistema de recuperación anticipado del Impuesto al Valor Agregado que se hubiese recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a la exportación o que se hubiese pagado al importar bienes para el mismo objeto, hasta un monto máximo que se determine aplicando la tasa que corresponda sobre los bienes adquiridos y servicios utilizados que forman parte del proyecto de inversión y que se encuentren afectos a los impuestos señalados. La citada resolución fijará el período tributario desde el cual proceda recuperar los impuestos pagados y el plazo para acreditar el cumplimiento de la exportación.

En aquellos casos en que con posterioridad a la fecha de la resolución a que hace referencia el inciso anterior, se lleve a cabo un proceso de reorganización empresarial en virtud del cual, no sea el titular del beneficio quien en definitiva realice las exportaciones comprometidas en el proyecto de inversión, se mantendrá vigente para la empresa que se cree o subsista, la autorización otorgada originalmente por el Ministerio de Hacienda para obtener la recuperación de IVA anticipado, con todos los derechos y obligaciones que ésta impone. Lo anterior siempre y cuando la nueva empresa manifieste ante el Ministerio de Hacienda su voluntad de continuar con el referido proyecto, lo que será ratificado por el citado Ministerio mediante resolución exenta. De continuar la empresa que subsista o se cree con el proyecto de inversión, no procederá cobro alguno respecto de las sumas devueltas con anterioridad al titular del beneficio.

El Ministro de Hacienda, por Decreto Supremo, establecerá la forma y procedimiento en que deberán presentarse los antecedentes que deban acompañarse para efectuar el análisis de la devolución anticipada a que se refiere este artículo.”

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 4 de la ley N° 20.848, que establece marco para la inversión extranjera directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva:

1. Reemplázase el inciso segundo⁸⁰, por el siguiente:

⁷⁹ El inciso 3°, del artículo 36° quedaría con la siguiente redacción:

Los exportadores que realicen operaciones gravadas en este Título podrán deducir el impuesto a que se refiere el inciso primero de este artículo, en la forma y condiciones que el párrafo 6° señala para la imputación del crédito fiscal. En caso que no hagan uso de este derecho, deberán obtener su reembolso en la forma y plazos que determine, por decreto supremo, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, previo informe favorable del Instituto de Promoción de Exportaciones Hacienda.

⁸⁰ Inciso 2°, del artículo 4°, que se deroga:

La solicitud que para estos efectos presente el inversionista extranjero deberá acreditar la materialización de la inversión en el país, así como contener una descripción detallada de la misma, incluyendo su monto, destino y naturaleza, todo ello en la forma y condiciones que determine la referida Agencia.

“La solicitud que para estos efectos presente el inversionista extranjero deberá acreditar la materialización de la inversión en el país o acompañar copia de la resolución otorgada por el Ministerio de Hacienda en la que se reconoce el cumplimiento de los requisitos establecidos en la letra b, del número 10, del artículo 12⁸¹ de la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, así como contener una descripción detallada de la inversión, incluyendo su monto, destino y naturaleza, todo ello en la forma y condiciones que determine la referida Agencia.”.

2. Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, para efectos de acceder a la exención a que se refiere el artículo 8⁸² de la ley, no será necesaria la presentación del precitado certificado.”.

Artículo 24.- Agréganse los siguientes incisos cuarto y final, nuevos, en el artículo 13⁸³ de la ley N° 20.544, que regula tratamiento tributario de los instrumentos derivados:

“No se aplicarán las sanciones establecidas en el inciso precedente, y en consecuencia podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivados, en aquellos casos en que las declaraciones no hayan sido presentadas oportunamente o estas contengan información errónea o incompleta, siempre que los contribuyentes presenten oportunamente una o más declaraciones rectificatorias, en la forma, plazo y de acuerdo a los antecedentes que establezca el Servicio de Impuestos Internos por resolución exenta.

Con todo, en el caso de operaciones de derivados que no sean efectuadas a través de intermediarios autorizados, entendiéndose por tales a los Bancos, a las instituciones financieras u otros entes sometidos a la fiscalización de una

81 Consideramos que está mal individualizada la norma y que se corresponde al número 10 de la letra B) del mismo artículo, modificado según se indica en el número 1 del artículo 22° de este proyecto de ley.

82 Artículo 8° vigente:

Artículo 8°.- Los inversionistas extranjeros estarán exentos del impuesto sobre las ventas y servicios en la importación de bienes de capital, en la medida que ésta cumpla los requisitos y se sujete a los procedimientos que para estos efectos se establecen en el artículo 12°, letra B, N° 10, del decreto ley N° 825, de 1974.

83 Artículo 13° vigente:

Artículo 13.- Normas de fiscalización. Los contribuyentes que celebren derivados deberán presentar, en la forma y plazo que el Servicio de Impuestos Internos establezca mediante resolución, una o más declaraciones juradas, según dicho organismo lo estime pertinente, para los efectos de la fiscalización de los impuestos que correspondan, con la información y antecedentes que requiera acerca de tales derivados. Cuando no se hayan presentado oportunamente dichas declaraciones, así como cuando las presentadas contengan información o antecedentes erróneos, incompletos o falsos, los contribuyentes no podrán deducir las pérdidas o gastos provenientes de los derivados no declarados en forma oportuna, o declarados en forma errónea, incompleta o falsa. En caso que el contribuyente de todas formas haya deducido tales pérdidas o gastos se aplicará, según corresponda, lo dispuesto por los artículos 33, número 1°, letra g), y 21, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En el caso de los contratos de derivados celebrados a través de intermediarios, el Servicio de Impuestos Internos podrá exigir a estos últimos la presentación de las referidas declaraciones juradas respecto de aquellos en cuya celebración hayan intervenido.

Si el contribuyente se negare a formular esta declaración, o si la presentada fuere maliciosamente incompleta o falsa, se sancionará en la forma prevista en el inciso primero del artículo 97, números 4° ó 5°, según corresponda, del Código Tributario.

Adicionalmente, los contribuyentes deberán mantener un registro de las operaciones de derivados que realicen, el que deberá contener la información y tendrá las características que el Servicio de Impuestos Internos determine mediante resolución, manteniendo tanto dicho registro como la documentación que dé cuenta de dichas transacciones a disposición del Servicio de Impuestos Internos para cuando éste lo requiera. En el caso de operaciones de derivados llevadas a cabo a través de intermediarios, la obligación establecida en este inciso pesará sobre éstos.

Superintendencia de Bancos o a alguna de las entidades mencionadas en la letra a) del N°2 del artículo 6°⁸⁴ de la Ley 20.544, sólo podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivados, si dicha operación cuenta con fecha cierta por alguno de los mecanismos que establece la ley.”

Artículo 25.- Los organismos públicos participantes y responsables de los procesos de comercio exterior, deberán:

1. Utilizar las tecnologías de información, las mejores prácticas internacionales y toda otra herramienta o sistema electrónico o digital disponible que sirva para la facilitación de comercio y que integre los procesos de cada organismo público en un solo Sistema.
2. Procurar reducir las complejidades y obstáculos de los procesos de las exportaciones, importaciones y tránsito de mercancías, con el fin de facilitar el comercio de bienes y servicios.
3. Solicitar que la documentación y/o información requerida para exportar, importar o para tránsito de mercancías, sea enviada por el Sistema disponible de ventanilla única de comercio exterior de Chile, salvo determinadas excepciones que serán fijadas por Reglamento del Ministerio de Hacienda.

Los estándares mínimos, requisitos tecnológicos y plazos de implementación que los organismos públicos deben cumplir para el óptimo funcionamiento del Sistema de ventanilla única de comercio exterior y de los sistemas integrados de cada organismo serán fijados por reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda.

Artículo 26.- Facúltase al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para concurrir a la formación y constitución de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil⁸⁵, cuyo objetivo fundamental sea la generación de información, estudios y propuestas, así como bienes y servicios, que faciliten la toma de decisión y coordinación entre los actores públicos y privados que participan de las cadenas logísticas de operaciones de comercio exterior, con el fin de incrementar la eficiencia, competitividad, productividad y sostenibilidad de este sector logístico.

84 Letra a), del número 2, del artículo 6°, vigente:

Artículo 6°.- Deducción de gastos en el caso de pagos al exterior. Los montos pagados o adeudados al extranjero por contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, respecto de los derivados celebrados o ejecutados con personas domiciliadas o residentes en el extranjero, sólo serán deducibles como gastos para los efectos previstos en esta ley y en la Ley sobre Impuesto a la Renta, en la medida que se cumpla copulativamente con las siguientes condiciones, además de las generales establecidas en el artículo 31 de dicha ley que les sean aplicables:

2. Que los respectivos derivados hayan sido:

a) Contratados en bolsas de valores nacionales reconocidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, o en bolsas extranjeras afiliadas a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), o con la intervención de agentes o corredores autorizados en mercados organizados, siempre que unos y otros se encuentren sujetos al control o supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros o de algún organismo de similar competencia a dicha superintendencia en su respectiva jurisdicción, y que este órgano, a su vez, constituya un miembro afiliado a la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o

85 Título XXXIII: De las personas jurídicas.

Los Ministerios enunciados, estarán facultados para participar en la modificación, disolución y liquidación, así como ser parte del Directorio de dicha persona jurídica en conformidad a sus estatutos.

Esta persona jurídica estará expresamente facultada para celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. Sus funciones y objetivos específicos serán determinados en los respectivos estatutos.

La referida persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6°⁸⁶ de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no podrá ejercer potestades públicas.

La entidad que se forme en ningún caso podrá celebrar ninguna clase de operación que pueda comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado y sus organismos.

Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.345, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros:

1. Modifícase el artículo 1 de la siguiente forma:

- a) Sustitúyese, en su numeral 6, la palabra “Superintendencia” por “Comisión”⁸⁷.
- b) Intercálase el siguiente numeral 7, nuevo, pasando el actual numeral 7 a ser 8, y así sucesivamente:

“7. Cliente: persona natural o jurídica que, en virtud de una relación contractual con un participante y que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de funcionamiento respectivas, puede ingresar órdenes de compensación a un sistema y otorgar garantías, ya sea que actúe por cuenta propia o de terceros, sin que por ello adquiera la condición de participante del mismo. El cliente únicamente podrá operar en el sistema, de manera directa o a través de un participante en la medida que haya suscrito con éste último un contrato de aquellos que se refiere el numeral 12 del artículo 7⁸⁸. Con todo, el participante será siempre responsable de todas las obligaciones asociadas a las operaciones del cliente ante el sistema, ya sea que éste las haya realizado por cuenta propia o de terceros.”.

- c) Agréganse los siguientes numerales 13 y 14, nuevos:

⁸⁶ Artículo 6°, vigente:

Artículo 6°.- El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales.

Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno, ejercer potestades públicas.

⁸⁷ El numeral 6, del artículo 1° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 1°.- Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entenderá por:

6. Participantes: personas jurídicas autorizadas por ley o por la Superintendencia Comisión para ser miembros de un sistema.

⁸⁸ Numeral que se agrega en la letra d) del número 2 de este artículo.

“13. Segregación: Consiste en el registro que la sociedad administradora debe llevar mediante anotaciones, en cuentas y subcuentas separadas respecto de las órdenes de compensación ingresadas y las garantías otorgadas individualmente por cada participante del sistema, cliente individual o grupo de clientes, según corresponda, considerando los niveles que se establezcan en las normas de funcionamiento. Lo indicado, con el objeto de permitir que la compensación y liquidación de las órdenes, y la realización de las garantías correspondientes, se efectúen de forma separada, como también, para fines de su portabilidad. En relación a los participantes se considerará segregación el registro que éstos deberán llevar mediante cuentas separadas respecto de las operaciones de los clientes y de los terceros por cuya cuenta actúen, respectivamente.

14. Portabilidad: calidad inherente a las órdenes de compensación y garantías registradas mediante anotaciones en las cuentas y sub-cuentas separadas de cada participante, cliente individual o grupo de clientes, según corresponda, y que faculta a la sociedad administradora para traspasar, sin que ello implique una nueva transacción, dichas cuentas o sub-cuentas a otro participante del sistema que acepte hacerse cargo de las mismas bajo su responsabilidad, en caso de verificarse un incumplimiento de obligaciones del participante primitivo u otros eventos que las normas de funcionamiento señalen especialmente al efecto.”.

2. Modifícase el artículo 7 de la siguiente forma:

- a) Reemplázase, en su inciso primero, la palabra “Superintendencia” por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”⁸⁹.
- b) Modifícase el numeral 4 del inciso segundo de la siguiente forma:
 - i. Intercálase, entre la palabra “comunicarán” y la frase “y entenderán aceptadas”, la siguiente frase: “, registrarán en forma segregada”.
 - ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Con el objeto de mitigar los riesgos del sistema, la segregación deberá considerar la clasificación de clientes a nivel individual y/o grupal, así como los tipos de operaciones o de instrumentos financieros, entre otros criterios de diferenciación.”.
- b) Modifícase el numeral 8 del inciso segundo de la siguiente forma:
 - i. Agrégase, a continuación de la palabra “participantes”, la expresión “o clientes”.
 - ii. Agrégase, a continuación de la palabra “asignación”, la expresión “, segregación, portabilidad”.
 - iii. Reemplázase la palabra “Superintendencia”, por “Comisión para el Mercado Financiero”.
- c) Modifícase el numeral 9 del inciso segundo de la siguiente forma:
 - i. Reemplázase la frase “, incluyendo” por la siguiente: “o clientes, incluyendo la portabilidad de las órdenes de compensación y garantías, y”.
 - ii. Agregase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente: “Asimismo, incluirán el plan de regularización que la sociedad administradora aplicará en la eventualidad que los referidos incumplimientos u otros hechos graves, comprometan su situación financiera, y que las garantías y demás

⁸⁹ El inciso 1°, del artículo 7° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 7°.- Las sociedades administradoras deberán presentar a la ~~Superintendencia~~ Comisión para el Mercado Financiero las normas de funcionamiento y un estudio tarifario de cada uno de los sistemas que administren.

resguardos previstos en esta ley resultaren insuficientes para restituirla. La definición e implementación de dicho plan requerirán la aprobación previa de la Comisión para el Mercado Financiero, la cual podrá formular observaciones o requerir que se complemente con aquellas medidas adicionales que considere necesarias. Éstas además deberán ser revisadas con la periodicidad que ese organismo determine⁹⁰.

d) Agrégase, en el inciso segundo, el siguiente numeral 12, nuevo:

“12. El contrato tipo que deberán suscribir los participantes con sus clientes para que éstos últimos puedan acceder al sistema, el cual contemplará la obligación del participante de llevar asimismo cuentas separadas para segregar e identificar a los clientes que operen a través suyo, ya sea utilizando sub-cuentas individuales, o bien, sub-cuentas grupales u ómnibus de la sociedad administradora. Adicionalmente, el contrato tipo deberá exigir a los clientes de los participantes llevar cuentas separadas para segregar e identificar a los terceros por cuya cuenta actúen, en su caso.”.

d) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i. Reemplázase la palabra “Superintendencia”, por “Comisión para el Mercado Financiero”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa ser punto y seguido, lo siguiente:

“En especial, le corresponderá determinar la información que las sociedades administradoras deberán proporcionar al público, a los participantes y sus clientes, incluyendo al menos aquella relativa a la segregación y portabilidad ofrecida por cada sistema, de conformidad con los numerales 4 y 8 anteriores⁹¹, así como los niveles de resguardo, riesgos y costos asociados.”.

e) Reemplázase, en el inciso final, la palabra “Superintendencia”, por “Comisión”, las dos veces que aparece.⁹²

90 El numeral 4, 8, y 9, del inciso 2°, del artículo 7° quedaría con la siguiente redacción:

Todo sistema deberá contar con normas de funcionamiento que contemplen, a lo menos, las siguientes materias:

4. El momento, requisitos y condiciones conforme a los cuales se comunicarán, registrarán en forma segregada y entenderán aceptadas las órdenes de compensación ingresadas al sistema, así como los casos excepcionales y la forma en que las partes podrán resciliar o modificar de mutuo acuerdo tales órdenes. Con el objeto de mitigar los riesgos del sistema, la segregación deberá considerar la clasificación de clientes a nivel individual y/o grupal, así como los tipos de operaciones o de instrumentos financieros, entre otros criterios de diferenciación.

8. Las garantías que deberán ser proporcionadas por los participantes o clientes, así como la forma y casos en que se procederá a la asignación, segregación, portabilidad y realización de dichas garantías. La Superintendencia Comisión para el Mercado Financiero autorizará los bienes susceptibles de ser otorgados en garantía y la forma de valorizarlos.

9. Las medidas que se adoptarán en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los participantes, ~~incluyendo~~ o clientes, incluyendo la portabilidad de las órdenes de compensación y garantías, y las sanciones que serán aplicadas en caso de infracción de las normas de funcionamiento y el procedimiento para su aplicación. Asimismo, incluirán el plan de regularización que la sociedad administradora aplicará en la eventualidad que los referidos incumplimientos u otros hechos graves, comprometan su situación financiera, y que las garantías y demás resguardos previstos en esta ley resultaren insuficientes para restituirla. La definición e implementación de dicho plan requerirán la aprobación previa de la Comisión para el Mercado Financiero, la cual podrá formular observaciones o requerir que se complemente con aquellas medidas adicionales que considere necesarias. Éstas además deberán ser revisadas con la periodicidad que ese organismo determine

91 Modificados según la letra b), del numeral 2, del presente artículo.

92 El inciso 3° y final, del artículo 7° quedaría de la siguiente forma:

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia Comisión para el Mercado Financiero para impartir las instrucciones y normas que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. En especial, le corresponderá determinar la información que las sociedades administradoras deberán proporcionar al público, a los participantes y sus clientes, incluyendo al menos aquella relativa a la segregación y portabilidad ofrecida por cada sistema, de conformidad con los numerales 4 y 8 anteriores, así como los niveles de resguardo, riesgos y costos asociados.

____ Las sociedades administradoras deberán proporcionar un estudio tarifario, el que será de conocimiento público. Las tarifas deberán fundamentarse en los ingresos y costos relevantes proyectados por la sociedad administradora y tener en consideración los principios de equilibrio financiero de la empresa y de no discriminación arbitraria. Los contenidos mínimos para la elaboración del estudio serán establecidos por la Superintendencia Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general. El referido estudio deberá ser actualizado a lo menos cada dos años y cada vez que la entidad ajuste sus

3. Modifícase el artículo 11 de la siguiente forma:

- a) Sustitúyese la palabra “Superintendencia”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”, todas las veces que aparece.

- b) Reemplázase el numeral 3⁹³, por el siguiente:

“3. Deberán llevar registro segregado de todas las operaciones por cada participante y cliente individual o grupo de clientes, según corresponda, en los sistemas que administren y las demás informaciones que determine la Comisión para el Mercado Financiero. Para estos efectos los participantes deberán informar a la sociedad administradora acerca de sus propias operaciones y garantías, distinguiéndolas en todo momento de las de sus clientes, las que deberán ser registradas en sub-cuentas individuales de posición y garantías a nombre de cada uno de éstos, o bien, en una o más sub-cuentas grupales u ómnibus para un conjunto de clientes, según lo que se haya convenido y de conformidad a las normas de funcionamiento.

Las garantías constituidas por los participantes y sus clientes, segregadas en la forma señalada, no estarán expuestas a pérdidas vinculadas a operaciones distintas de aquellas a las que caucionen específicamente. Lo indicado en ningún caso se aplicará a los fondos de garantía a que se refiere el Capítulo II del Título IV⁹⁴ de esta ley.”.

- b) Intercálase el siguiente numeral 4, nuevo, pasando el actual numeral 4 a ser 5, y así sucesivamente:

“4. Deberán efectuar el traspaso de las cuentas y sub-cuentas separadas en que se encuentren registradas las órdenes de compensación vigentes y garantías de un determinado participante, cliente individual o grupo de clientes, según corresponda, a otro participante del sistema que acepte hacerse cargo de las mismas y de las obligaciones que de ello se deriven bajo su responsabilidad, en caso de verificarse un incumplimiento de obligaciones u otros eventos que las normas de funcionamiento señalen especialmente.”.

- c) Reemplázase el actual numeral 895, que pasa a ser 9, por el siguiente:

“9. Proporcionarán a la Comisión para el Mercado Financiero toda la información que ésta solicite en ejercicio de sus funciones de supervigilancia y fiscalización, incluyendo la información proveniente de los participantes y sus clientes, respecto de las operaciones sobre instrumentos financieros que sean objeto de compensación y liquidación. Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero deberá compartir la información proveniente de los participantes y sus clientes respecto de las operaciones sobre instrumentos financieros que sean objeto de compensación y liquidación con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central de Chile y el Consejo de Estabilidad Financiera, en caso que estos organismos lo requieran, quedando obligados a mantener reserva de los mismos conforme a las leyes que respectivamente los rigen. Además, la Comisión podrá entregar esta información a organismos supervisores extranjeros, sujeto

tarifas, o a petición fundada de la Superintendencia.

93 El numeral 3, del artículo 11°, que se deroga:

Artículo 11.- Las sociedades administradoras estarán sujetas a las siguientes normas:

3. Deberán llevar registro de todas las operaciones realizadas por los sistemas que administren y las demás informaciones que determine la Superintendencia;

94 Capítulo II: De los fondos de garantía.

95 Numeral 8, del artículo 11° que se deroga:

Artículo 11.- Las sociedades administradoras estarán sujetas a las siguientes normas:

8. Proporcionarán a la Superintendencia toda la información que ésta solicite en ejercicio de sus funciones de supervigilancia y fiscalización.

a un convenio vigente de cooperación que permita el intercambio recíproco de información y la observancia de las obligaciones de confidencialidad que procedan.”.

4. Reemplázase el inciso primero del artículo 2296, por el siguiente:

“Los participantes serán responsables por las órdenes de compensación que los mismos ingresen al sistema; como también por las que ingresen sus clientes actuando por cuenta propia o de terceros.”.

5. Reemplázase el inciso primero del artículo 2897, por el siguiente:

“La sociedad administradora del sistema deberá llevar un registro segregado de las garantías constituidas por los participantes, sus clientes o grupos de clientes, según corresponda, en la forma establecida en las normas de funcionamiento.”.

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores:

1. Modifícase el artículo 20 de la siguiente forma:

- a) Reemplázase el literal a98 por el siguiente:

“a.- Contar con un gobierno corporativo, e implementar un sistema de gestión de riesgos que permitan asegurar el resguardo de los valores encargados para su custodia y transferencia, así como la continuidad financiera y operacional de la empresa, de conformidad a los principios y estándares internacionalmente aceptados que determine la Comisión, mediante norma de carácter general u otros principios y estándares que está determine.

La Comisión para el Mercado Financiero podrá representar a la empresa, mediante resolución fundada y en cualquier momento, que su gobierno corporativo o sistema de gestión de riesgos no se encuentran ajustados a dichos estándares o principios, en cuyo caso, la empresa deberá subsanar las observaciones dentro del plazo que para tal efecto le indique la Comisión.”.

96 Inciso 1°, del artículo 22°, que se deroga:

Artículo 22.- Los participantes presentarán las órdenes de compensación al sistema a nombre propio, aun cuando éstas sean por cuenta ajena.

97 Inciso 1°, del artículo 28°, que se deroga:

Artículo 28.- La sociedad administradora del sistema deberá llevar un registro de las garantías en la forma establecida en las normas de funcionamiento.

98 Letra a), del artículo 20°, que se deroga:

Artículo 20°.- Para desarrollar su objeto las empresas deberán:

a.- Establecer instalaciones y sistemas que permitan asegurar el resguardo y seguridad de los valores encargados para su custodia y transferencia.

b) Reemplázase en su literal h) la palabra “Superintendencia”, por “Comisión” las dos veces que aparece⁹⁹.

2. Agrégase, en el artículo 25¹⁰⁰, el siguiente literal e, nuevo:

“e.- A los organismos de jurisdicciones con los que Chile haya suscrito acuerdos para el intercambio de información, en los términos que éstos lo establezcan y sólo respecto de los ciudadanos, residentes o entidades organizadas bajo las leyes de dichas jurisdicciones.”.

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.220 que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios:

1. Elimínase del título de la ley la palabra “agropecuarios”.

2. Elimínase del epígrafe del Título I la palabra “agropecuarios”¹⁰¹.

3. Reemplázase el artículo 1¹⁰², por el siguiente:

“Artículo 1.- Las bolsas de productos son sociedades anónimas abiertas especiales, que tienen por exclusivo objeto proveer a sus miembros el local y la infraestructura necesaria para realizar eficazmente, en el lugar que se

99 La letra h), del artículo 20° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 20°.- Para desarrollar su objeto las empresas deberán:

h) Proporcionar un estudio tarifario, el cual será de conocimiento público, respaldando la estructura de remuneraciones a ser aplicadas por los servicios prestados. El estudio debe fundamentarse en la estructura de ingresos y costos relevantes proyectados por la empresa para su normal funcionamiento. Para ello, se deberá tener en consideración los principios de equilibrio financiero de la empresa y de equidad entre los usuarios. Los contenidos mínimos para la elaboración del estudio serán establecidos por la Superintendencia Comisión a través de una norma de carácter general. Con todo, el referido estudio deberá ser actualizado a lo menos cada dos años o con ocasión de ajustes a las tarifas de la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia Comisión podrá requerir en cualquier oportunidad una actualización del referido estudio.

100 El artículo 25° numera a quienes las empresas podrán proporcionar información sobre los valores recibidos en depósito.

101 El epígrafe del Título I quedaría con la siguiente redacción: TÍTULO I De las bolsas de productos agropecuarios y definiciones

102 Artículo 1°, que se deroga:

Artículo 1°.- Las bolsas de productos agropecuarios, en adelante las bolsas de productos, son sociedades anónimas abiertas especiales, que tienen por exclusivo objeto proveer a sus miembros el local y la infraestructura necesaria para realizar eficazmente, en el lugar que se les proporcione, las transacciones de productos mediante mecanismos continuos de subasta pública, asegurando la existencia de un mercado equitativo, competitivo y transparente. Dichas sociedades deberán incluir en su nombre la expresión “Bolsa de Productos Agropecuarios”.

Las Bolsas podrán, para el debido cumplimiento de su objeto social, realizar actividades afines o complementarias de éste, siempre que éstas se contemplen expresamente en sus estatutos. En todo caso, la información económica derivada de la gestión de ellos en el mercado de productos agropecuarios debe ser pública tanto para personas naturales o jurídicas interesadas.

Corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante, “la Superintendencia”, velar por el cumplimiento de la presente ley y de las normas que la complementen, y supervigilar el funcionamiento de las bolsas de productos, de acuerdo a las facultades que le confieren la ley orgánica y las señaladas en el presente cuerpo legal.

les proporcione, las transacciones de productos mediante mecanismos continuos de subasta pública, asegurando la existencia de un mercado equitativo, competitivo y transparente. Dichas sociedades deberán incluir en su nombre la expresión "Bolsa de Productos".

Las Bolsas podrán, para el debido cumplimiento de su objeto social, realizar actividades afines o complementarias de éste, siempre que éstas se contemplen expresamente en sus estatutos. En todo caso, la información económica derivada de la gestión de ellos en el mercado de productos debe ser pública para las personas naturales o jurídicas interesadas. Corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante la "Comisión", velar por el cumplimiento de la presente ley y de las normas que la complementen, y supervigilar el funcionamiento de las bolsas de productos, de acuerdo a las facultades que le confieren la ley orgánica y las señaladas en el presente cuerpo legal."

4. Modifícase el artículo 5, de la siguiente forma:

- a) Agregáse, en el numeral 2), a continuación de la palabra "productos", la siguiente frase: "y sobre los bienes que autorice la Comisión de conformidad a lo dispuesto en el número 5) del presente artículo".
- b) Elimínase, en el numeral 4), la frase ", sean o no estos de naturaleza agropecuaria".
- c) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

"5) Los demás títulos, bienes, instrumentos y contratos que la Comisión autorice por norma de carácter general."¹⁰³

5. Modifícase el artículo 6 de la siguiente forma:

- a) Elimínase el inciso segundo, pasando el actual inciso tercero, a ser segundo.
- b) Reemplázase, en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, la frase "Una bolsa podrá rechazar", por la siguiente frase: "Con todo, una bolsa podrá rechazar".
- c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Los socios, directores, gerentes y demás personas que realicen funciones relacionadas con la intermediación en una corredora de productos, deberán cumplir con los requisitos de idoneidad y acreditar conocimientos

103 El artículo 5° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 5°.- Podrán ser objeto de negociación por intermedio de las Bolsas de Productos y sobre los bienes que autorice la Comisión de conformidad a lo dispuesto en el número 5) del presente artículo:

- 1) Los productos agropecuarios y los derechos que nacen de los contratos sobre aquéllos, que cumplan con la reglamentación que al respecto determinen las bolsas;
- 2) Los contratos de opción de compra o de venta los contratos de futuro u otros contratos de derivados sobre productos;
- 3) Los títulos que representen los productos, contratos y facturas referidos en los números 1) y 4) de este artículo, en términos tales que éstos no puedan ser enajenados o gravados sino mediante el endoso de dichos títulos;
- 4) Las facturas que se emitan con arreglo a las disposiciones de la ley N 19.983 y las facturas comerciales de traspaso extranjero o facturas de exportación, que reflejen toda clase de operaciones civiles o comerciales con bienes o servicios, ~~sean o no éstos de naturaleza agropecuaria~~. Las bolsas reglamentarán las condiciones y requisitos de seguridad que, en razón de su naturaleza, deberán cumplir las facturas, estableciendo, al menos, controles que aseguren que sólo podrán transarse en bolsa facturas únicas, auténticas, íntegras e irrevocablemente aceptadas, y
- 5) ~~Los demás títulos que la Superintendencia autorice por norma de carácter general:~~
- 5) Los demás títulos, bienes, instrumentos y contratos que la Comisión autorice por norma de carácter general.

Cada vez que en esta ley se empleen los términos producto o productos, sin otra especificación, deben entenderse comprendidas en ellos las cinco categorías señaladas precedentemente.

suficientes en la intermediación de productos en la forma y periodicidad que determine la Comisión, mediante norma de carácter general.”¹⁰⁴.

6. Reemplázase el inciso primero del artículo 8¹⁰⁵ por el siguiente:

“Las personas jurídicas que ejerzan el giro de corredor, deberán incluir en su razón social la expresión "corredores de bolsa de productos" y su objeto será la intermediación de productos y la ejecución de las demás actividades complementarias. Para estos efectos, la Comisión, mediante norma de carácter general, determinará los elementos y condiciones con que deberán cumplir las actividades para ser consideradas como complementarias a la intermediación de productos.”.

7. Modifícase el artículo 14 de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el inciso primero, la palabra “Superintendencia”, por la palabra “Comisión”.¹⁰⁶

b) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:

“Los corredores serán responsables de la ejecución de las operaciones que se pacten por su intermedio.”.

c) Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los corredores serán responsables de la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio, de la conformidad con los estándares y de la legítima procedencia de los productos que negocien. Cuando se trate de títulos representativos de productos, los corredores serán responsables de la autenticidad e integridad de dichos títulos, de la vigencia de la inscripción de su último titular en los registros correspondientes y de la autenticidad del último endoso, cuando proceda.”.

104 El artículo 6° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 6°.- Los corredores de bolsas de productos, en adelante los corredores, son las personas naturales o jurídicas que se dedican a las operaciones de intermediación en las bolsas de productos.

~~Los corredores podrán también dedicarse a la compra o venta de productos en bolsa por cuenta propia, siempre que exista ánimo para transferir derechos sobre los mismos. No obstante, cuando un corredor opere por cuenta de un comitente que desee mantener en reserva su identidad, se dejará constancia de esta circunstancia en la documentación pertinente y se consignarán únicamente los datos del referido intermediario. Esta reserva no será oponible a la Superintendencia.~~

~~Una bolsa podrá rechazar. Con todo, una bolsa podrá rechazar, con el acuerdo de a lo menos dos tercios de sus directores en ejercicio, a las personas que opten al cargo de corredor de dicha bolsa, en la medida que ellas, o sus socios cuando se trate de personas jurídicas, no cumplan los requisitos de solvencia, idoneidad, y demás exigencias que la respectiva bolsa establezca en sus estatutos o reglamentos. La bolsa, al establecer y verificar el cumplimiento de dichos requisitos y exigencias, no podrá restringir o entorpecer la libre competencia. En caso de rechazo, los fundamentos del mismo deberán constar en el acta respectiva.~~

Los socios, directores, gerentes y demás personas que realicen funciones relacionadas con la intermediación en una corredora de productos, deberán cumplir con los requisitos de idoneidad y acreditar conocimientos suficientes en la intermediación de productos en la forma y periodicidad que determine la Comisión, mediante norma de carácter general.

105 Inciso 1°, del artículo 8°, que se deroga:

Artículo 8°.- Las personas jurídicas que ejerzan el giro de corredor, deberán incluir en su razón social la expresión "corredores de bolsa de productos" y su objeto será la intermediación de productos y la ejecución de las demás actividades complementarias que le autorice expresamente la Superintendencia.

106 El inciso 1°, del artículo 14° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 14.- Las transacciones y operaciones que se efectúen en las bolsas de productos, deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en la ley, a las reglas que determine la ~~Superintendencia~~ Comisión mediante norma de carácter general y a los estatutos y reglamentos internos de la bolsa respectiva. Estos últimos podrán recoger los usos y costumbres, tanto nacionales como extranjeros, en cuanto no sean contrarios a la ley o al orden público interno.

d) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“Los corredores no serán responsables de las obligaciones emanadas de los contratos negociados.”.¹⁰⁷

8. Reemplázase el artículo 15¹⁰⁸ por el siguiente:

“Artículo 15.- Las bolsas de productos, en caso de incumplimiento de las operaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo precedente, tendrán la obligación de utilizar los medios que la ley y los reglamentos pongan a su disposición para lograr la ejecución de las mismas, incluido el ejercicio de las acciones tendientes a hacer efectivas las garantías constituidas para tales efectos. Les queda prohibido a los corredores compensar las sumas que reciban para comprar productos o el precio que se les entregue, con las cantidades que pudieren adeudarles sus clientes.

Las minutas que entreguen a sus clientes y las que se den recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurren a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba contra el corredor que las suscriba u otorgue.”.

9. Reemplázase el artículo 19¹⁰⁹, por el siguiente:

“**Artículo 19.-** Las bolsas deberán llevar un Registro de Productos, el cual estará a disposición del público, en el que se inscribirán los padrones que describan las características y condiciones con que deberán cumplir los tipos de productos que se podrán transar en la bolsa.

Sólo podrán transarse en bolsa los productos que correspondan a los padrones que se encuentren inscritos en el Registro de Productos a que se refiere este artículo.”.

107 Inciso 2°, 3° y final del artículo 14°, que se derogan:

Los corredores serán responsables del cumplimiento de los contratos que se pacten por su intermedio. Las bolsas de productos, en caso de incumplimiento de tales contratos, tendrán la obligación de utilizar los medios que la ley y los reglamentos pongan a su disposición para lograr la ejecución de esas obligaciones, incluido el ejercicio de las acciones tendientes a hacer efectivas las garantías constituidas para tales efectos.

Les queda prohibido a los corredores compensar las sumas que reciban para comprar productos o el precio que se les entregue, con las cantidades que pudieren adeudarles sus clientes.

Las minutas que entreguen a sus clientes y las que se den recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurren a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba contra el corredor que las suscriba u otorgue.

108 Artículo 15°, que se deroga:

Artículo 15.- Los corredores serán responsables de la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio; de la conformidad con los estándares y de la legítima procedencia de los productos que negocien. Cuando se trate de títulos representativos de productos, los corredores serán responsables de la autenticidad e integridad de dichos títulos, de la vigencia de la inscripción de su último titular en los registros correspondientes y de la autenticidad del último endoso, cuando proceda.

109 Artículo 19°, que se deroga:

Artículo 19.- La Superintendencia llevará un Registro de Productos, el cual estará a disposición del público, en el que se inscribirán:

- 1) Los tipos homogéneos de bienes físicos que puedan transarse en la bolsa, conjuntamente con los padrones que deban cumplir y contratos sobre éstos.
- 2) Los títulos representativos de los tipos de productos.
- 3) Los modelos de contratos de opciones de compra o de venta, de futuro u otros contratos de derivados sobre productos;
- 4) Las facturas que puedan transarse en la respectiva bolsa;
- 5) Los demás títulos que la Superintendencia autorice por norma de carácter general.

La Superintendencia establecerá los requisitos que deberán cumplir los títulos, las entidades emisoras y las demás modalidades necesarias para practicar las inscripciones a que se refiere el inciso anterior.

Sólo podrán transarse en bolsa los productos que correspondan a los padrones que se encuentren inscritos en el Registro de Productos a que se refiere este artículo.

10. Reemplázase el artículo 32¹¹⁰ por el siguiente:

“Artículo 32.- En casos calificados, la Comisión podrá suspender la compra o venta de uno o más productos. De la resolución adoptada por la Comisión podrá reclamarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 21.000¹¹¹.”.

11. Reemplázase el artículo 33¹¹² por el siguiente:

“Artículo 33.- La certificación de conformidad de los productos que se transen en bolsa con los padrones establecidos en el Registro de Productos y con las demás exigencias que establezca la misma bolsa, deberá ser realizada por entidades que cumplan las normas de este artículo.

110 Artículo 32°, que se deroga:

Artículo 32.- En casos calificados, la Superintendencia podrá suspender la compra o venta de uno o más productos. De la resolución adoptada por la Superintendencia podrá reclamarse ante los organismos establecidos en el decreto ley N° 211, de 1974.

111 Artículo 70°, vigente:

Artículo 70.- Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Procederá el mismo reclamo de ilegalidad para la impugnación de las resoluciones, órdenes o instrucciones que impongan a la persona o entidad fiscalizada una medida correctiva o preventiva en el ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 30 del artículo 5.

Interpuesto el reclamo, la corte deberá pronunciarse previamente sobre la admisibilidad de éste, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto reclamado, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica. Cuando corresponda, el reclamante deberá acompañar el certificado que acredite que el recurso de reposición no ha sido resuelto dentro de plazo legal en los términos del artículo 65 de la ley N° 19.880 o, en su defecto, copia del escrito por medio del cual se solicita la expedición de dicho

El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.

Si la Corte de Apelaciones declarar admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.

Evacuado el traslado, o acusada la rebeldía, la corte dictará sentencia en el término de quince días. La sentencia que rechace el reclamo de ilegalidad será susceptible de apelación ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde su notificación. La apelación será conocida en la forma prevista en los incisos anteriores y gozará de preferencia para su vista y fallo.

La sola interposición del reclamo de ilegalidad a que se refiere el presente artículo no suspenderá los efectos del acto impugnado.

112 Artículo 33°, que se deroga:

Artículo 33.- La certificación de conformidad de los productos agropecuarios que se transen en bolsa con los padrones establecidos en el Registro de Productos y con las demás exigencias que establezca la misma bolsa, deberá ser realizada por entidades que cumplan las normas de este artículo.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no será necesaria la certificación de conformidad de los productos que vayan a ser transados, cuando las partes que intervienen en la negociación así lo hubieren acordado expresa y previamente, en el tiempo y forma que determine la reglamentación de la bolsa respectiva.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los títulos sobre productos emitidos de conformidad al artículo 20 de esta ley.”:

El Servicio Agrícola y Ganadero llevará un Registro de Entidades Certificadoras y practicará la inscripción, previa verificación de los siguientes requisitos: a) contar con las instalaciones y la capacidad técnica indispensables para efectuar la certificación de conformidad, según los padrones establecidos en el Registro de Productos; b) constituir una garantía por el desempeño de su actividad, en los términos indicados en el artículo 11, por un monto equivalente a 3.000 unidades de fomento, y c) la inspección de los productos, así como la certificación de conformidad que otorgue la entidad certificadora, deberán ser suscritas por un profesional competente, bajo la responsabilidad de dicha entidad.

En aquellos rubros de productos agropecuarios que excedan la competencia técnica del Servicio Agrícola y Ganadero y previo a la inscripción de la respectiva entidad certificadora, se deberá contar con un informe favorable del servicio público competente, relativo al cumplimiento de los requisitos indicados en el inciso anterior.

El Servicio Agrícola y Ganadero podrá rechazar la solicitud respectiva mediante resolución fundada, contra la cual podrán impetrarse los recursos administrativos y jurisdiccionales que sean procedentes. Asimismo, la Fiscalización de las entidades certificadoras corresponderá a este Servicio.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no será necesaria la certificación de conformidad de los productos que vayan a ser transados, cuando las partes que intervienen en la negociación así lo hubieren acordado expresa y previamente, en el tiempo y forma que determine la reglamentación de la bolsa respectiva. Esto no será aplicable a los títulos sobre productos emitidos de conformidad al artículo 20¹¹³ de esta ley.

Las bolsas de productos llevarán un Registro de Entidades Certificadoras, que tendrá el carácter de público, y practicarán la inscripción de dichas entidades cuando verifique que se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Cuenten con las instalaciones, y la capacidad técnica y profesional necesaria para efectuar la certificación de conformidad, según los padrones establecidos en el Registro de Productos.
- b) Constituyan una garantía por el desempeño de su actividad, en los términos indicados en el artículo 11 de la presente ley, por un monto equivalente a 3.000 unidades de fomento.
- c) Los que establezcan las bolsas de productos en sus reglamentos o normas.”.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.190 que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continua el proceso de modernización del mercado de capitales:

1. Reemplázase el artículo 19¹¹⁴, por el siguiente

113 Artículo 20°, vigente:

Artículo 20.- Para los efectos de esta ley, los títulos sobre certificados de depósito de productos sólo podrán ser emitidos por la bolsa, contra entrega y endoso en dominio a la misma de certificados que den cuenta del previo almacenamiento de ellos y del vale de prenda, cuando corresponda. Dichos títulos tendrán las características y se transarán en la forma que establezca la bolsa en su reglamento.

El reglamento de la bolsa establecerá los requisitos a cumplir para la autorización, almacenamiento y retiro de los citados productos.

Por su parte, los títulos sobre contratos o facturas, a que se refiere el artículo 5°, N° 3, de la presente ley, sólo podrán ser emitidos por la bolsa, contra la cesión traslativa de dominio a la misma de los derechos emanados de los respectivos contratos o facturas, junto con la entrega de los mismos. Dichos títulos tendrán las características y se transarán en la forma que establezca la bolsa en su reglamento.

La bolsa, por los títulos que emita de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, será responsable de la existencia y la custodia de los contratos o facturas que respaldan su emisión y por la custodia de sus frutos y flujos, mientras estos no sean entregados a sus legítimos dueños. Asimismo, será responsable por que los títulos emitidos sean compatibles con las condiciones, plazos y modalidades contenidas en los contratos y facturas que éstos representan. Será de cargo de los legítimos dueños de tales títulos, el riesgo por el incumplimiento o no pago de las obligaciones contenidas en los respectivos contratos o facturas. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades que, conforme a la ley y a la reglamentación bursátil, pudieran corresponderle a los corredores que participaron en la operación, así como de las garantías o resguardos que pudieran existir, en su caso.

Los títulos sobre contratos o facturas no podrán tener una duración o vencimiento superior a un año, contado desde la fecha de su primera transacción en bolsa.

Corresponderá a la bolsa la custodia de los certificados de depósito y de los vales de prenda recibidos, así como de los contratos y facturas, según corresponda, los cuales serán entregados y endosados o cedidos al poseedor de un título equivalente, según lo defina la bolsa, cuando éste opte por el retiro de los productos, contratos o facturas, contra entrega de los mismos. Dicha custodia podrá ser llevada de manera directa por la bolsa o a través de bancos o empresas de depósito y custodia de aquellas reguladas por la ley N° 18.876.

Todos los productos, contratos y facturas, y los frutos o flujos de éstos, que sean entregados a la bolsa, ya sea para garantizar o facilitar su transacción bursátil, o bien para los efectos de la emisión de títulos de conformidad a este artículo, serán mantenidos por ésta a nombre propio y por cuenta de sus legítimos dueños, por lo que no podrán ser embargados por acreedores de la bolsa y en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, no formarán parte de la masa de bienes del deudor.

Para todos los efectos de la custodia a que se refiere el inciso anterior, serán plenamente aplicables en lo que correspondan, las disposiciones contenidas en el Título XXIII de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.

114 Artículo 19°, que se deroga:

“Artículo 19.- Autorízase a la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante también indistintamente “CORFO”, para suscribir y pagar cuotas emitidas por fondos de inversión creados al amparo de la ley N° 20.712¹¹⁵ y administrados por sociedades anónimas sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, que tengan como objeto la inversión en cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo.

Asimismo, autorízase a CORFO para suscribir y pagar cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo, que orienten sus inversiones mayoritariamente en acciones de sociedades anónimas cerradas y sociedades por acciones, cuyas ventas netas en los ejercicios anteriores no excedan las seiscientos mil unidades de fomento anuales.

Artículo 19.- Autorízase a la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, para suscribir y pagar cuotas emitidas por fondos de inversión creados al amparo de la ley N° 18.815 y administrados por sociedades anónimas sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

La autorización referida en el inciso anterior estará vigente por siete años a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. No obstante, se autoriza a CORFO para pagar dichas cuotas durante los cuatro años siguientes a la expiración del plazo de siete años anterior.

Las inversiones que se realicen en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, deberán sujetarse a las siguientes normas:

- 1) El plazo de duración de los fondos no podrá ser superior a 14 años y sus activos deberán encontrarse invertidos mayoritariamente en acciones de sociedades anónimas cerradas y sociedades por acciones, que no tengan más de siete años de existencia y cuyas ventas netas en los ejercicios anteriores no excedan las cuatrocientas mil unidades de fomento anuales. Sin embargo, en ningún caso podrán beneficiar empresas, que tengan las siguientes actividades:
 - a) Sociedades cuyo negocio principal sea la prestación de servicios financieros.
 - b) Sociedades cuyo objeto sea la participación en concesiones de obras de infraestructura de uso público reguladas por la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
 - c) Sociedades cuyo negocio principal sea inmobiliario.
 - d) Sociedades anónimas abiertas al momento de realizar la inversión por parte del fondo.

La CORFO, sus autoridades y sus funcionarios no podrá participar en la administración de los recursos de los fondos en los cuales haya invertido, ni en la administración de las sociedades en que inviertan dichos fondos. Sin embargo, deberá participar y votar en las asambleas de aportantes de los fondos, especialmente en las materias señaladas en los artículos 21 y 22 de la ley N° 18.815, salvo cuando se refieran a lo señalado en el inciso anterior.
 - 2) Las autoridades que conforme a las leyes que rigen a CORFO tomen las decisiones de adquisición y enajenación de cuotas conforme al inciso primero de este artículo, y sin perjuicio de las demás normas aplicables, en especial del decreto al que se refiere el número 5) de este artículo, responderán como administradores de fondos de tercero según lo señalado en el artículo 161 de la ley N° 18.045.
- Asimismo, esas autoridades deberán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley por parte de las administradoras de los fondos en que inviertan.
- 3) El valor de la totalidad de las cuotas y compromisos de suscripción de cuotas adquiridos por la CORFO bajo la autorización establecida en la presente ley, no podrá exceder de 2.000.000 de unidades tributarias mensuales al momento de asumir cada compromiso de suscripción. Sin embargo, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda se podrá autorizar un monto superior, que no exceda las 3.500.000 unidades tributarias mensuales.
 - 4) La inversión de CORFO en cuotas de un fondo en particular, no podrá ser superior al 40% de las cuotas emitidas y pagadas por dicho fondo.
- Si como consecuencia de la liquidación de un fondo, CORFO recibiere acciones de las sociedades en que estuviere invertido, tendrá un plazo de dos años para la enajenación de las acciones recibidas, la que en todo caso deberá efectuarse mediante remate en una bolsa de valores. El Consejo de CORFO podrá prorrogar este plazo por hasta dos años adicionales.
- 5) La inversión de CORFO en cuotas de fondos de inversión, conforme al inciso primero de este artículo, deberá efectuarse a través de uno o más programas de fomento a la industria de capital de riesgo, que establecerá CORFO cumpliendo con los criterios, condiciones y límites que se establezcan mediante decreto expedido conjuntamente por los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda.
- Dichos programas, que se publicarán en la página web de CORFO, considerarán, a lo menos, lo siguiente:
- a) Los requisitos de elegibilidad que deberán cumplir los fondos y las administradoras.
 - b) Las condiciones de la participación de CORFO.
 - c) Las obligaciones especiales de información que recaerán sobre las administradoras.
- 6) CORFO deberá publicar al menos una vez al año un informe que contendrá el detalle de las inversiones realizadas durante la vigencia de los programas, incluyendo, al menos, la individualización de los fondos en los cuales participa o participó durante ese año, la administradora de dichos fondos, el monto de recursos invertidos y comprometidos, los dividendos y disminuciones de capital percibidos, como también el porcentaje de propiedad de CORFO en cada uno de los fondos en cuestión.
 - 7) Los fondos en los cuales CORFO posea cuotas, así como las sociedades en que dichos fondos inviertan, no podrán solicitar préstamos, créditos, garantías o recursos financieros adicionales a CORFO. Podrán sin embargo participar en los programas de CORFO destinados a financiar asistencia técnica en formación y gestión.

115 Establece la administración de fondos de terceros y carteras individuales y deroga los cuerpos legales que indica.

CORFO, sus autoridades y sus funcionarios, no podrán participar en la administración de los fondos en los cuales haya invertido la Corporación ni en la administración de las sociedades en que inviertan dichos fondos. Asimismo, no podrán participar en la administración de las sociedades en que inviertan los fondos de inversión de capital de riesgo, cuyas cuotas sean suscritas por CORFO. Con todo, podrán participar y votar en las asambleas de aportantes de los fondos, en especial en lo relativo a las materias de sesiones ordinarias y extraordinarias a que se refieren los artículos 73¹¹⁶ y 74¹¹⁷ de la ley N° 20.712.

Las inversiones que se realicen en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, deberán sujetarse a las siguientes normas:

- 1) CORFO podrá suscribir y pagar cuotas emitidas por:
 - a. Fondos de inversión, en los cuales participen como aportantes inversionistas institucionales, y cuya duración no podrá ser superior a 20 años, sin contar su período de liquidación. Estos fondos deberán tener como objeto la adquisición de cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo que cuenten o no con financiamiento otorgado por los programas de capital de riesgo de CORFO, y que cumplan con las normas operativas que se establezca para tales efectos.
 - b. Fondos de inversión de capital de riesgo, que orienten sus inversiones mayoritariamente en acciones de sociedades anónimas cerradas y sociedades por acciones. Dichas sociedades deberán presentar ventas netas en los ejercicios anteriores no excedan las seiscientos mil unidades de fomento anuales, al momento de la primera inversión del fondo. Sin embargo, en ningún caso podrán beneficiar empresas, que tengan las siguientes actividades:

116 Artículo 73°, vigente:

Artículo 73.- Materias de las Asambleas Ordinarias de Aportantes. Son materias de la asamblea ordinaria de aportantes, las siguientes:

- a) Aprobar la cuenta anual del fondo que deberá presentar la administradora, relativa a la gestión y administración del fondo, y a los estados financieros correspondientes.
- b) Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia.
- c) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia.
- d) Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia, si correspondiere.
- e) Designar anualmente, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a las empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Superintendencia.
- f) Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del fondo.
- g) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

117 Artículo 74°, vigente:

Artículo 74.- Materias de las Asambleas Extraordinarias de Aportantes. Son materias de la asamblea extraordinaria de aportantes, las siguientes:

- a) Aprobar las modificaciones que proponga la administradora al reglamento interno del fondo
- b) Acordar la sustitución de la administradora.
- c) Tomar conocimiento de cualquiera situación que pueda afectar los intereses de los aportantes.
- d) Acordar los aumentos y disminuciones de capital, en aquellos casos en que el reglamento interno requiera que esta materia deba ser aprobada por asamblea y salvo en aquellos casos en que esta ley contemple que ellos se producen automáticamente y de pleno derecho. En todo caso, las disminuciones de capital deberán realizarse a prorrata, según la participación que cada aportante tenga en el fondo. En caso que la disminución sea mediante una disminución del número de cuotas, una vez determinado el número de cuotas a disminuir, los aportantes podrán pactar entre sí un sistema de distribución distinto de la proporción que a cada uno le corresponda en tales cuotas, el que no podrá alterar el monto total a disminuir y deberá sujetarse a la forma que determine el Reglamento.
- e) Acordar la división, transformación o fusión con otros fondos o series.
- f) Acordar la disolución anticipada del fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneraciones, y aprobar la cuenta final al término de la liquidación.
- g) Aprobar la creación de series de cuotas así como las modificaciones a las características de las ya existentes.
- h) Los demás asuntos que, por el Reglamento o por el reglamento interno del fondo, corresponden a su conocimiento.

En los casos señalados en las letras b) y f) y cuando el reemplazo o liquidación no hayan provenido de causas imputables a la administradora, el reglamento interno podrá establecer el pago de una indemnización a la administradora por los perjuicios irrogados a ésta, por un monto o porcentaje preestablecido en dicho reglamento.

- a) Sociedades cuyo objeto sea la participación en concesiones de obras de infraestructura de uso público reguladas por la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
- b) Sociedades cuyo objeto sea inmobiliario.
- c) Sociedades anónimas abiertas al momento de realizar la inversión por parte del fondo.

La duración de estos fondos no podrá ser superior a 14 años, sin contar su período de liquidación.

- 2) Las autoridades que conforme a las leyes que rigen a CORFO tomen las decisiones de adquisición y enajenación de cuotas conforme a los incisos primero y segundo de este artículo, y sin perjuicio de las demás normas aplicables, en especial del decreto al que se refiere el número 4) de este artículo, responderán como administradores de fondos de terceros según lo señalado en el artículo 17¹¹⁸ de la ley N° 20.712.

Asimismo, esas autoridades serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley por parte de las administradoras de los fondos en que inviertan.

- 3) El valor de la totalidad de las cuotas, incluyendo los compromisos de suscripción de cuotas, que sean adquiridos y comprometidos por CORFO bajo la autorización establecida en la presente ley, no podrá exceder del 40% de las cuotas del respectivo fondo.
- 4) La inversión de CORFO en cuotas de fondos de inversión, conforme al inciso primero y segundo de este artículo, deberá efectuarse a través de uno o más programas de fomento a la industria de capital de riesgo, que se establezcan cumpliendo con los criterios, condiciones y límites que se establezcan mediante decreto expedido conjuntamente por los Ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Hacienda.

Dichos programas, que se publicarán en la página web de CORFO, considerarán, a lo menos, lo siguiente:

- a) Los requisitos de elegibilidad que deberán cumplir los fondos y las administradoras.
- b) Las condiciones de la participación de CORFO.
- c) Las obligaciones especiales de información que recaerán sobre las administradoras.
- 5) CORFO deberá publicar al menos una vez al año un informe que contendrá el detalle de las inversiones realizadas durante la vigencia de los programas, incluyendo, al menos, la individualización de los fondos en los cuales participa o participó durante ese año, la administradora de dichos fondos, el monto de recursos invertidos y comprometidos, los dividendos y disminuciones de capital percibidos, como también el porcentaje de propiedad de CORFO en cada uno de los fondos en cuestión.

118 Artículo 17°, vigente:

Artículo 17.- Culpa leve y pago de indemnizaciones. La administradora, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de los objetivos establecidos en el reglamento interno del fondo, en términos de la rentabilidad y seguridad de sus inversiones. La administración de cada fondo debe realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de éste y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación de activos que efectúe por cuenta del mismo, se hagan en el mejor interés del fondo.

La administradora podrá demandar a las personas que le hubieran ocasionado perjuicios al fondo, por los daños causados a éste, en juicio sumario. El mecanismo, forma y plazo por el cual dichas indemnizaciones serán enteradas al fondo o traspasadas a sus partícipes deberá estar establecido en el reglamento interno de cada fondo.

La administradora estará obligada a indemnizar al fondo o a los partícipes por los daños y perjuicios que ella o cualesquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le causaren al fondo, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualesquiera de las actuaciones prohibidas a que se refieren los artículos 22 y 23 de la presente ley. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones serán solidariamente responsables del reembolso, que incluirá el daño emergente y el lucro cesante.

- 6) Si como consecuencia de la liquidación de un fondo, CORFO recibiere acciones de las sociedades en que estuviere invertido, tendrá un plazo de dos años para la enajenación de las acciones recibidas, la que en todo caso deberá efectuarse mediante una licitación pública. El Consejo de CORFO podrá prorrogar este plazo por hasta dos años adicionales.
- 7) Los fondos en los cuales CORFO posea cuotas, así como las sociedades en que dichos fondos inviertan, no podrán solicitar préstamos, créditos, garantías, subsidios o recursos financieros adicionales a CORFO. Podrán sin embargo participar en los programas de CORFO destinados a financiar asistencia técnica en formación y gestión.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 19 bis, nuevo:

“Artículo 19 bis.- La Corporación de Fomento de la Producción podrá autorizar, dentro del proceso de liquidación de fondos de capital de riesgo que participen de los programas de fomento a la industria de capital de riesgo de esta institución, y previa solicitud de la administradora del fondo, que el pago de los créditos otorgados por la Corporación al cual estén obligados los fondos sea hasta los recursos disponibles del fondo, pudiendo extinguir, total o parcialmente, mediante este acto su obligación con la Corporación.

Previo al ejercicio de dicha facultad, se deberá acreditar que:

1. Tanto la administradora como el fondo de inversión, han cumplido cabalmente con:
 - a. El Reglamento Interno.
 - b. Los aspectos fundamentales de su plan de negocios.
 - c. El programa de financiamiento al cual esté sometido el fondo.
2. Directa o indirectamente, la administradora, los aportantes y todos los relacionados a éstos, no fueron destinatarios de recursos provenientes del fondo o de las empresas de su portafolio. Se exceptúa lo estipulado en el Reglamento Interno respectivo.
3. No existen compromisos financieros de la administradora, los aportantes o las empresas del portafolio, en favor del fondo.

Con el objeto de resolver lo señalado en el párrafo precedente, CORFO podrá solicitar la realización de auditorías externas y toda la información que pudiera requerir del fondo y la administradora.

En caso de que producto de la revisión realizada se detecten graves incumplimientos a los números 1 y 2 anteriores, CORFO podrá rechazar la solicitud de la administradora y encomendar las acciones legales correspondientes contra el fondo y/o la administradora.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Las modificaciones que contemplan los artículos 1 números 1 literal b, 3 y 4; 4; 5 número 1; 9 número 2; 11 número 1; 12, y; 17 número 2 entrarán en vigencia una vez dictado sus respectivos reglamentos, los cuales deberán expedirse dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo segundo transitorio.- La modificación introducida por el número 2 del artículo 2 de la presente ley, entrará en vigencia una vez dictado los reglamentos que instruyen las modificaciones establecidas por los números 1 literal b, 3 y 4 del artículo 1 de la presente ley.

Artículo tercero transitorio.- La modificación introducida por el número 3 del artículo 1 de la presente ley, entrará en vigencia tres años después contados desde la fecha de publicación de esta ley.

Artículo cuartotransitorio.- La modificación introducida por el artículo 10 de la presente ley, entrará en vigencia una vez dictado el reglamento que instruye la modificación establecida por el números 2 del artículo 9 de la presente ley.

Artículo quinto transitorio.- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecerá, mediante decreto supremo, la gradualidad de incorporación de las Direcciones de Obras Municipales a la plataforma digital a que se refieren los incisos undécimo y siguientes del artículo 116 de este cuerpo legal, pudiendo distinguir entre los distintos tipos de trámites.

Artículo sexto transitorio.- Respecto a las modificaciones introducidas por el artículo 15 de la presente ley, los titulares de cargos de planta que ejerzan la jefatura de la unidad de obras al momento de entrada en vigencia de esta ley, podrán seguir ejerciendo dicha función hasta su cargo quede vacante por cualquier causa, momento a partir del cual se deberá efectuar el concurso a que se refieren los incisos tercero a séptimo, nuevos, del artículo 24 de la ley orgánica constitucional de municipalidades.

Artículo séptimo transitorio.- La modificación introducida por el artículo 19 de esta ley entrará en vigencia 90 días después de dictados los respectivos reglamentos que allí se señalan e impartidas las instrucciones del Presidente de

la República. Tanto las instrucciones como los reglamentos deberán expedirse dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo octavotransitorio.- El reglamento a que se refieren el artículo 25 deberá dictarse en el plazo de seis meses contado desde la fecha de publicación de esta ley.

Artículo noveno transitorio.- Las modificaciones introducidas por el artículo 28 de la presente ley comenzarán a regir una vez transcurrido el plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial, período dentro del cual las sociedades administradoras deberán adecuar las normas de funcionamiento de los sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros que administren, según el procedimiento establecido en el artículo 10 de ese mismo cuerpo legal.

Artículo décimo transitorio.- Respecto a las modificaciones introducidas por el artículo 29 de la presente ley, el Registro de Entidades Certificadoras que lleva el Servicio Agrícola Ganadero, de acuerdo al actual artículo 33 de la ley N° 19.220¹¹⁹, será traspasado al Registro de Entidades Certificadoras que llevarán las bolsas de productos dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha de publicación de esta ley.

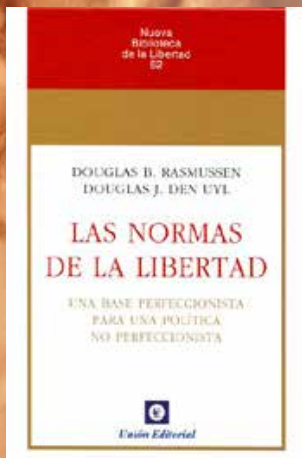


119 Véase en la nota al pie n°70.

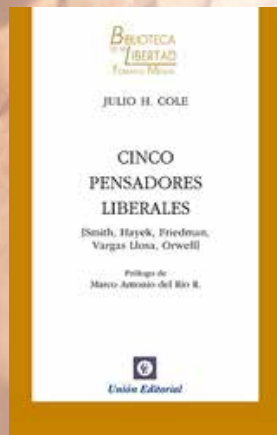


Unión Editorial

LyD representante exclusivo de
Unión Editorial en Chile



Las Normas de la Libertad,
de Douglas B. Rasmussen y
Douglas J. Den Uyl



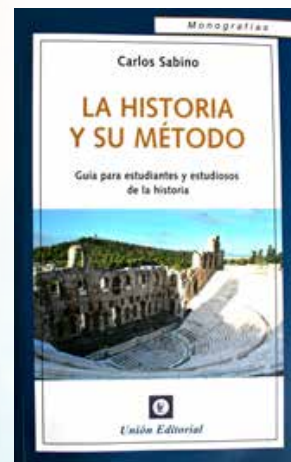
Cinco pensadores liberales
(Smith, Hayek, Friedman,
Vargas Llosa, Orwell),
de Julio H. Cole



El bello árbol,
de James Tooley



**La Economía explicada
a mis hijos,**
de Martín Krause



La historia y su método,
de Carlos Sabino

**Más de 300
títulos
disponibles**

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.LYD.ORG

**ACÁ PODRÁS ENCONTRAR TODOS NUESTROS
ESTUDIOS, ANÁLISIS DE LA CONTINGENCIA,
COLUMNAS DE OPINIÓN Y MUCHO MÁS!**



LIBERTAD Y DESARROLLO
Alcántara 498, Las Condes | Santiago de Chile
Fono: +56 2 2377 4800 | E-mail: lyd@lyd.org

LD
LIBERTAD Y DESARROLLO

